

ORDENANZA REGULADORA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA SOCIAL

TÍTULO PRELIMINAR.

PARTE I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y MARCO NORMATIVO

La Constitución Española configura un Estado social y democrático de derecho enumerando los principios rectores de la política social, obligando a los poderes públicos a inspirar en aquellos su política social. Dicho mandato viene recogido en el Título I, Capítulo III, cuya concreción se materializa a través de los artículos 9.2 y 14 del mismo cuerpo legal, configurando la base de un sistema público de Servicios Sociales. En este ámbito y derivado del sistema de distribución competencial regulado en la propia norma constitucional y a través del artículo 148.1. 20ª se atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia relativa a la asistencia social.

La Ley Orgánica 1/2006 de 10 de abril, de Reforma de Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en su artículo 49.1.24, asume efectivamente competencias exclusivas en materia de servicios sociales.

Así mismo, la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en su artículo 25.2 e) establece que el Municipio ejercerá, en todo caso, como competencia propia las siguientes materias: e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y de atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social.

Por otro lado, el artículo 26.1.c) regula que en los Municipios con población superior a 20.000 habitantes tendrán, además, competencia en protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social.

Finalmente, y por lo que respecta a la normativa sectorial en la materia, el artículo 29.1 b) de la Ley 3/2019 de 18 de febrero de la Generalitat Valenciana, de Atención Primaria de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, establece las competencias municipales en la provisión y gestión de los Atención Primaria de Servicios Sociales de atención primaria de carácter básico, en relación con el artículo 18.1 del mismo texto legal.

De conformidad con la Ley 3/2019, se garantizará el acceso al sistema y a las prestaciones integradas en su catálogo como un derecho subjetivo, de conformidad con la aplicación real y efectiva de los derechos sociales dispuesta en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y desterrará el carácter discrecional que lo ha dominado tradicionalmente.

El artículo 3.3, regula el Derecho Subjetivo como derecho que concede a la persona titular del mismo la facultad de exigir el cumplimiento a la administración pública competente, que tiene la obligación de garantizarlo de acuerdo con la legislación vigente. Se reconocen como derechos subjetivos los servicios sociales, así como las prestaciones garantizadas reconocidas como tales en esta ley.



Por su parte, el título II regula el Catálogo y Cartera de Prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, con el objetivo de determinar el conjunto de prestaciones, y concretar la regulación de los elementos propios de cada una, diferenciando las prestaciones garantizadas, caracterizadas por su exigibilidad como derecho subjetivo y con crédito ampliable (art. 32), de las condicionadas, sujetas a disponibilidad presupuestaria.

El artículo 31, relativo al concepto y tipo de prestaciones, establece en el punto 1. qué se entiende por prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y las actuaciones que se ofrecen a la ciudadanía, de acuerdo con los artículos 3 y 5 de esta ley.

En el punto 2, regula que las prestaciones del Sistema Público Valenciano de Atención Primaria de Servicios Sociales podrán ser:

a) Prestaciones profesionales: comprenden el conjunto de intervenciones de carácter temporal o permanente, dirigidas a la prevención, rehabilitación, diagnóstico, atención en las situaciones de necesidad social y promoción de la autonomía y la inclusión social de la ciudadanía, así como la atención sociosanitaria y socioeducativa de esta.

b) Prestaciones económicas: consisten en entregas dinerarias, de carácter puntual o periódico, proveídas por las administraciones competentes a fin de mejorar la calidad de vida y la autonomía, la atención a situaciones de urgencia, la atención sociosanitaria o la cobertura de las necesidades básicas, que permiten a la ciudadanía conseguir un nivel de vida digno.

c) Prestaciones tecnológicas: comprenden aquellas prestaciones de asistencia tecnológica y ayudas de carácter instrumental destinadas a la protección, mantenimiento o mejora de la autonomía y la inclusión social y garantía para la accesibilidad universal.

En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las administraciones públicas tienen que actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

Los principios de necesidad y eficacia, quedan justificados por razón de interés general, al garantizarse el establecimiento de un marco normativo sólido y estable que haga previsible la actuación de la Administración pública e incremente la seguridad jurídica en sus relaciones con ésta. Constituye un instrumento más para garantizar la correcta atención e intervención profesional a cualquier persona que necesite de los servicios, prestaciones o asesoramiento sobre sus derechos, dentro de un sistema de protección social.

En virtud del principio de proporcionalidad, esta ordenanza contiene la regulación mínima e imprescindible para establecer un régimen previsible en la ejecución de las políticas sociales y en la distribución de las prestaciones económicas incluidas en la cartera de servicios del Ayuntamiento.

En aplicación del principio de transparencia, en los términos que establece el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el acuerdo inicial de esta ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alfafar con la finalidad de hacer efectivo el trámite de audiencia a la ciudadanía y obtener cuántas alegaciones puedan hacerse por otras personas o



entidades. La aprobación definitiva se realizará según el procedimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y además estará a disposición de la ciudadanía en el Portal de Transparencia.

En aplicación del principio de eficiencia, la fijación del régimen de las prestaciones económicas permitirá la homogeneización del sistema y garantizará la equidad en la redistribución de los recursos públicos que se emplean en los servicios sociales.

La mejora de protocolos y procesos de atención pretenden situar a la persona como centro, imperativo éste al cual obliga la excelencia, la calidad en la atención.

Describir las situaciones, diagnosticarlas y pronosticarlas en el plan personalizado de intervención social es un derecho de la ciudadanía para una resolución más efectiva y satisfactoria de la demanda de nuestros servicios y su aplicación es una buena manera de gestionar la gestión de los recursos públicos.

Conforme a lo previsto en la normativa de referencia, el Pleno del Ayuntamiento de Alfafar, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2020, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza de prestaciones económicas individualizadas, actualmente vigente.

Sin embargo, la catástrofe acaecida el pasado 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, con consecuencias especialmente graves y trágicas en determinados municipios y zonas de la provincia de Valencia, entre ellos, el municipio de Alfafar y, en concreto, el núcleo urbano del Barrio Orba, que se ha convertido en el, hasta la fecha, mayor desastre natural en la historia reciente de este país, requieren de la actualización normativa de la regulación de las medidas en materia de protección social existente y, por tanto, la revisión de la Ordenanza vigente.

PARTE II. FUNDAMENTACIÓN

La Atención Primaria de Servicios Sociales municipales tienen como una de sus funciones y tareas más consolidadas la de proporcionar atención y ayuda a personas que atraviesan una situación vital de dificultad, derivada, en la mayoría de los casos, de la imposibilidad de hacer frente a determinados gastos que, o bien son necesarios para el mantenimiento de una forma de vida compatible con la dignidad a la cual toda persona tiene derecho o que incluso, son precisos en determinadas ocasiones, para la supervivencia.

El Ayuntamiento, como administración pública, requiere disponer de una normativa ágil y efectiva, de forma que pueda conciliarse la atención a las personas en situación de emergencia social con la normativa y los procedimientos propios de la administración y los que son aplicables en estos casos.

La presente normativa trata de unir ambos requisitos -atención efectiva a las necesidades sociales y cumplimiento normativo- poniendo especial énfasis en la agilidad del procedimiento, puesto que una parte importante de la eficacia de la prestación económica reside en qué pueda ser cubierta con inmediatez y atendiendo la urgencia que en determinados casos se plantea.



TÍTULO I. ASPECTOS GENERALES

Artículo 1. Régimen jurídico

a) Las prestaciones económicas individualizadas (de ahora en adelante PEUS) son un derecho subjetivo en los términos establecidos en la ley 3/2019 de Atención Primaria de Servicios Sociales de la Generalitat (artículo 32) y su normativa de desarrollo, que se concreta a través de actuaciones de carácter económico dirigidas a personas individuales o unidades de convivencia.

La concesión de estas prestaciones se podrá regir por las órdenes que apruebe la Conselleria con competencia en la materia de Atención Primaria de Servicios Sociales según lo establecido en la Ley 38/2003 General de subvenciones, el Real Decreto 887/2006 que aprueba el reglamento de subvenciones, las resoluciones y criterios interpretativos de la IGAE en materia de subvenciones y especialmente por lo previsto en la presente ordenanza.

En la materia que nos ocupa rigen también las leyes generales del procedimiento administrativo común Ley 39/2015 de 1 de octubre y la Ley 40/2015 de Régimen jurídico del Sector público, en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, y en las restantes normas de derecho administrativo que en su caso sean aplicables, y en su defecto, las normas de derecho privado.

Asimismo, se ajustará a lo establecido en la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada el 9 de noviembre de 2017 por el Pleno del Ayuntamiento de Alfafar y publicada en el BOP nº 24, del 2 de febrero de 2019.

b) Por lo que respecta al Procedimiento, las ayudas de emergencia social, tienen la consideración de “procedimientos de emergencia ciudadana” de acuerdo con la ley 9/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana en la Administración de la Comunidad Valenciana, de conformidad con el ANEXO de la dicha ley, que recoge los Procedimientos administrativos declarados de emergencia ciudadana estableciendo en el punto 1. a) las Ayudas de emergencia social.

Por lo tanto, según los artículos 3 y siguientes de la mencionada Ley 9/2016, su tramitación tiene la atribución del carácter de procedimiento de emergencia, con los efectos siguientes:

- La tramitación de urgencia del procedimiento, es decir, la reducción en mitad de los plazos para resolver y notificar el procedimiento que se trate, excepto los plazos de presentación de solicitudes y recursos.

- Efectos positivos del silencio en aquellos procedimientos de emergencia ciudadana que reconozcan un derecho subjetivo para sus solicitantes, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente.

- La obligación de la Administración de velar por la adecuada dotación de recursos materiales, económicos y personales a los departamentos responsables de la tramitación de los mencionados procedimientos.

- Se establecen limitaciones en la realización de modificaciones presupuestarias sobre aquellas aplicaciones presupuestarias de la Generalitat



destinadas a financiar las prestaciones vinculadas a los procedimientos declarados de emergencia ciudadana.

- Tendrán carácter prioritario y se tramitan también con reducción de plazos en la mitad, la autorización de los créditos en los procedimientos declarados de emergencia.

- Los formularios de solicitudes y las resoluciones correspondientes a este de procedimientos tendrán que estar redactados en lenguaje claro e inteligible y se reducirá al máximo la documentación a aportar por los solicitantes.

- Además, estas ayudas se configuran como ayudas económicas de carácter extraordinario, destinadas a paliar situaciones o estados de necesidad, por lo cual, a fin de no desvirtuar su propia naturaleza, a las personas beneficiarias de éstas no se les exigirá el cumplimiento de la obligación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social establece en el artículo 13.2 e) de la ley General de Subvenciones.

- De especial interés para la gestión de esta ordenanza es el apartado 2 del artículo 37 de la Ley 3/2019, que refleja que no podrá embargarse aquella cuantía, de las prestaciones económicas incluidas en este artículo, que no exceda del salario mínimo interprofesional, en virtud de los artículos 606 y 607 de la ley de enjuiciamiento civil y resto de normas del ordenamiento civil.

Artículo 2. Objeto y ámbito de aplicación

a) Mediante la presente ordenanza se regula la normativa aplicable y el procedimiento a seguir para la solicitud y resolución de las prestaciones económicas individualizadas en materia de Atención Primaria de Servicios Sociales que otorga el Ayuntamiento de Alfafar y, en concreto, las relativas a los programas de emergencia y urgencia social, suministro energético y gastos derivados de la tenencia de la vivienda, acciones extraordinarias y cuántas prestaciones por prescripción técnica se consideran necesarias para cubrir las necesidades vitales para la subsistencia de las personas.

b) Tendrán por objeto paliar temporalmente la ausencia o la insuficiencia de ingresos de acuerdo con el cual se determine en esta ordenanza, también tendrán carácter preventivo ante las situaciones de vulnerabilidad económica o financiera, social, laboral y cultural de las personas facilitando su inclusión social y la cobertura de sus necesidades básicas.

c) Las ayudas podrán otorgarse con carácter individual o a núcleos familiares o de convivencia, con carácter periódico o, cuando se trate de servicios esporádicos y adquisiciones puntuales, por una sola vez en el ejercicio económico salvo que atiendan diversa finalidad.

d) Esta prestación será garantizada para toda la ciudadanía y para el conjunto de las prestaciones económicas individualizadas que se realizan en el término municipal de Alfafar, gestionadas y financiadas por el Ayuntamiento, a través de los servicios sociales, ampliando, en caso de ser necesario, los créditos presupuestarios, para atender a todas las personas que tengan prescripción social facultativa para su necesidad.



e) El ámbito de intervención territorial del Ayuntamiento de Alfafar, en su condición de administración local que presta la Atención Primaria Básica en Servicios sociales, será el adjudicado al Departamento 9, Zona Básica 9.13.1 (Alfafar y Lloc Nou de la Corona) según lo previsto en el Decreto 34/2021, de 26 de febrero, del Consell, de regulación del Mapa de Atención Primaria de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana.

Artículo 3. Principios rectores

Las prestaciones económicas individualizadas tendrán como base la orientación hacia la justicia social, el desarrollo humano, el enfoque comunitario, la perspectiva de género y la igualdad en la diversidad y se regirán por los principios rectores que se enuncian a continuación:

a) **Universalidad.** Se garantizará el acceso a los servicios sociales a todas las personas, en condiciones de igualdad, accesibilidad universal y equidad, en el municipio de Alfafar.

b) **Responsabilidad Pública.** Los poderes públicos garantizarán la existencia de las prestaciones mediante la dotación de personal, recursos técnicos y financieros, de las infraestructuras y equipamientos necesarias para asegurar el ejercicio los derechos reconocidos.

c) **Responsabilidad institucional a la atención.** Se contará con la figura de profesional de referencia, para las personas que accedan a solicitar una prestación, cumplirán todas sus actuaciones. La finalidad es dar coherencia y continuidad al itinerario de intervenciones y garantizar el acceso a las diferentes prestaciones y servicios. Se tiene que procurar la continuidad de la atención de las personas usuarias por todos los medios al alcance de la institución, durante el periodo temporal en que la necesitan.

d) **Prevención.** Se actuará preferentemente sobre las causas que originan las necesidades sociales, dando la prioridad debida a las acciones preventivas.

e) **Promoción de la autonomía personal.** Se facilitarán los medios necesarios porque las personas disponen libremente de los apoyos y las condiciones más convenientes para desarrollar sus proyectos vitales.

f) **Orientación centrada en la persona.** Se garantizará la atención social personalizada, integral y continua, a partir de una intervención holística y favoreciendo una actuación transversal y coordinada.

g) **Promoción de la intervención para la integración.** Se procurará la utilización de las prestaciones para el mantenimiento de la persona en el medio convivencia y comunitario, siempre que la prescripción lo considere más adecuado.

h) **Calidad y profesionalidad en la provisión de los servicios.** Se establecerán unos estándares mínimos de calidad para las prestaciones sociales, orientados a su mejora continua.



Artículo 4. Finalidad de la subvención

a) Las prestaciones económicas individualizadas (de ahora en adelante PEUS) son un derecho subjetivo que se concreta mediante actuaciones económicas dirigidas a personas individuales o unidades de convivencia, a fin de poner remedio a una situación gravemente deteriorada, de necesidad urgente o con graves problemas específicos que afectan su autonomía personal, social y económica, y que no se puedan resolver con medios propios (Art 31.2 b), art. 32 y art. 37 de la ley 3/2019).

b) El régimen de concesión de las PEUS, siempre que cumplan los requisitos, será el de concesión directa.

c) La finalidad que se pretende es satisfacer las necesidades básicas, paliar las situaciones de urgencia social y desprotección, promover la autonomía personal y en general mejorar las condiciones de la calidad de vida de todas aquellas personas que cumplen los requisitos regulados específicamente para el acceso a esta prestación.

d) Las actuaciones ante situaciones de urgencia social tendrán carácter prioritario ante cualquier otra actuación, y cuando se requieran prestaciones o servicios, podrán prestarse sin que sean exigibles para su acceso todos o alguno de los requisitos establecidos. Así mismo, las prestaciones serán garantizadas y gratuitas mientras se mantenga la situación de urgencia social.

Artículo 5. Naturaleza e incompatibilidades.

Las Prestaciones Económicas de Urgencia Social, en tanto su finalidad de atención a la situación sobrevenida, son inembargables, tienen carácter finalista, y no son un fin en sí mismas, debiendo destinarse únicamente al objeto para el que han sido concedidas.

Las ayudas comprendidas en el ámbito de aplicación de estas Bases Reguladoras serán compatibles con cualquier otra prestación, derecho o percepción económica procedentes de cualquier administración o ente público o privado que pudiera corresponderle a la persona beneficiaria o a otro miembro de la unidad familiar o de convivencia, destinada a la misma finalidad, así como con el disfrute gratuito de servicios que cubran esa misma necesidad.

Artículo 6. Personas beneficiarias

A efectos de la presente Ordenanza, podrán tener la condición de persona beneficiaria tanto las personas físicas como las unidades familiares o de convivencia, considerándose personas usuarias (según lo previsto en el artículo 4.7 del Decreto 27/2023, de 10 de marzo, del Consell, por el cual se regulan la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales, y la ordenación de estos dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales) que se encuentren en situación de emergencia o vulnerabilidad social y siempre que cumplan los requisitos regulados en la presente ordenanza.



Se garantizará el derecho a la atención primaria de Servicios Sociales en condiciones de igualdad, accesibilidad universal y equidad a todas las personas con residencia efectiva en Alfafar.

Serán titulares del derecho subjetivo reconocido a través de las PEUS todas las personas, en condiciones de igualdad, dignidad y privacidad, sin ninguna discriminación por circunstancia personal o social y con residencia efectiva en Alfafar.

Se entiende por residencia efectiva en Alfafar la acción de residir o habitar en el municipio, con carácter habitual y con voluntad de permanencia en aquel, manifestada por medio de actos ejecutados de forma expresa frente a autoridades u otros actores sociales que acreditan un arraigo estable y real en la localidad.

En cualquier caso, podrá acreditarse dicha circunstancia, mediante la siguiente documentación:

- a) Informe de Atención Primaria de Servicios Sociales municipales que acredite la residencia efectiva.
- b) Certificado de empadronamiento municipal
- c) Tener descendientes menores de 18 años escolarizados en el municipio, acreditando este hecho mediante certificado del centro escolar.

Artículo 7. Unidad de convivencia

1. Tendrán la consideración de unidad de convivencia las siguientes personas o grupos de personas:

a) Se considerará unidad familiar o de convivencia las personas que viven solas en una vivienda o alojamiento. En los casos que, viviendo solas, estuvieran unidas a otras por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal deberán reclamar, durante todo el periodo de duración de la prestación, cualquier derecho económico que le pueda corresponder a cualquier miembro de la unidad de convivencia y ejercitar las acciones correspondientes para hacerlas efectivas. Se exceptuarán en los siguientes casos:

- que se encuentran iniciados los trámites judiciales de nulidad, separación o divorcio, o el de baja en el Registro de Uniones de hecho en su caso.

- que se trate de mujeres víctimas de violencia de género, de violencia sexual, de trata, así como otras violencias sobre la mujer recogidas en el artículo 3 de la Ley 7/2012.

- que se trate de personas que tengan la condición de refugiadas o hayan realizado la solicitud para el reconocimiento de tal condición y dicha solicitud sea admitida a trámite y su cónyuge o persona con el que mantenga una forma de relación permanente análoga a la conyugal no resida en el territorio español.

- que se trate de personas migrantes y su cónyuge o persona con el que mantenga una forma de relación permanente análoga a la conyugal no resida en el territorio español, en tal supuesto, la condición de unidad de convivencia podrá mantenerse por un periodo máximo de doce meses.

b) Se considerará unidad familiar o de convivencia, a efectos de las ayudas previstas en la presente ordenanza, la integrada por la persona solicitante y



las que convivan en el mismo domicilio, y se encuentran unidas por vínculos matrimoniales o relación permanente análoga a la conyugal o por vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción u otras personas que las que conviven en virtud de guarda con fines de adopción o acogida.

Sin perjuicio de lo anterior, se considerará que también forman parte de la unidad familiar o de convivencia las otras personas que, conviviendo en el mismo domicilio que la persona solicitante, pudieron beneficiarse de las ayudas que se concedan.

A efectos de lo que establece este artículo, se considera pareja de hecho la constituida con una relación de afectividad análoga a la conyugal con al menos dos años de antelación, por quien, no estando impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y hayan convivido de manera estable y notoria con carácter inmediato a la solicitud de la prestación y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años.

La defunción de alguna de las personas que constituyen la unidad de convivencia no alterará la consideración de tal, aunque la dicha defunción suponga la pérdida de los vínculos previstos en el apartado anterior

c) Sin perjuicio de lo que se establece en el apartado anterior, podrán ser destinatarias de PEUS aquellas unidades de convivencia formadas por dos o más personas de 18 años o menores de esta edad emancipados que, sin mantener entre sí una relación de las consignadas en el subapartado a) y b), de este artículo, habiten en un mismo domicilio. En los casos en los cuales una o varias personas compartan vivienda con una unidad de convivencia, se entenderá que no forman parte de esta a efectos de la PEUS, considerándose la existencia de dos unidades de convivencia, una formada por las personas que carecen de vínculo entre sí y otra la constituida por los miembros de una familia, o, en su caso, de una unidad de convivencia constituida por los miembros de la familia o relación análoga y una persona beneficiaria individual. Estas personas beneficiarias tendrán que haber vivido de manera independiente durante al menos un año antes de la solicitud de la PEUS.

d) Así mismo, se entenderá que una persona ha vivido de manera independiente si ha permanecido en situación de alta en cualquier de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social durante al menos doce meses, continuados o no, y siempre que acredite que su domicilio ha sido diferente a sus progenitores, tutores o acogedores durante tres años inmediatamente anteriores a la solicitud. Este requisito no se exigirá a las personas que para ser víctimas de violencia de género hayan abandonado su domicilio habitual, las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o a las cuales se encuentran en otras circunstancias que puedan determinarse por criterio profesional.

2. Las personas que hayan establecido de forma sobrevenida su domicilio en la misma vivienda o alojamiento con otra unidad de convivencia con las cuales mantengan alguno de los vínculos previstos en el subapartado b) del apartado 1 de este artículo y siempre que acrediten este extremo mediante el informe social que se realizará atendiendo la gravedad de la situación, podrán tener la consideración de unidad de convivencia independiente, en los siguientes casos:

a) Personas prostituidas, víctimas de explotación sexual o trata y las víctimas de violencia de género o intrafamiliar, que hayan abandonado su domicilio



habitual solas o acompañadas de sus hijas, hijos o personas menores de edad en régimen de guarda con fines de adopción o acogida familiar permanente u otros familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.

b) Personas que dejan su domicilio habitual junto con sus descendientes, en su caso, a consecuencia de un proceso judicial matrimonial por nulidad, separación o divorcio, o a consecuencia de la ausencia de recursos económicos suficientes para sufragar los gastos de alojamiento, o por alguna otra situación extrema que así lo determine. Se entenderá que podrán tener la consideración de situación extrema los supuestos de pérdida repentina de vivienda derivados de un siniestro, catástrofe o causa de fuerza mayor.

c) Personas o unidades de convivencia que hayan sufrido un proceso de desahucio de su vivienda habitual y no sean titulares de derechos de propiedad o de uso otros inmuebles que puedan ser destinados a vivienda

d) Personas entre 16 y 24 años de edad, ambos incluidos, con personas menores de edad a su cargo.

e) Personas mayores de edad y menores de 25 años que hayan estado sujetos en algún periodo de los tres años anteriores a la mayoría de edad a una medida administrativa de protección de menores, o en un centro socioeducativo para el cumplimiento de medidas judiciales.

f) Personas entre 16 y 18 años que participan en programas para la preparación de la vida independiente como complemento a una medida de protección jurídica de la persona menor de edad, de acuerdo con el artículo 22 bis de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la ley de enjuiciamiento civil.

g) Transcurrido el periodo de 12 meses se extinguirá la unidad de convivencia diferenciada y se integrarán todos los convivientes en una única unidad de convivencia.

3. En ningún caso, se podrá formar parte de dos unidades de convivencia con carácter simultáneo, excepto, por un lado, las personas menores de edad en régimen legal de custodia compartida establecida en sentencia judicial o convenio regulador homologado judicialmente por nulidad, separación o divorcio de las personas titulares de las prestaciones. Y, en el mismo sentido lo serán las personas mayores que residen rotativamente en casa de los hijos/as.

4. La convivencia efectiva o la no convivencia referida en este artículo tendrán que ser objeto de comprobación por parte de Atención Primaria de Servicios Sociales cuando existan indicios que permiten dudar de la veracidad de la situación declarada.

5. Se considerará que no extingue la convivencia la separación transitoria por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares.

Artículo 8. Vivienda o alojamiento

1. Se entenderá por vivienda o alojamiento todo marco físico utilizado de manera habitual como residencia permanente por una o más personas que



componen la unidad de convivencia y vivan de manera independiente, aunque las personas que lo habitan no posean ningún título jurídico.

2. Se entienden comprendidas como modalidades de vivienda o alojamiento:

a) Viviendas o alojamientos particulares ocupados por una única unidad de convivencia.

b) Viviendas o alojamientos particulares en régimen de alquiler en las cuales convivan unidades de convivencia independientes y hayan arrendado una o varias habitaciones de conformidad con la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

c) Viviendas o alojamientos particulares en los cuales varias unidades de convivencia compartan colectivamente un mismo alquiler, apareciendo todas ellas como coarrendatarias.

En todos los supuestos previstos en este artículo se entiende que existe una única vivienda o alojamiento, independientemente del número de unidades de convivencia que compartan ese marco físico y de la existencia o no de parentesco entre estos.

3. Tendrán la consideración de centro de acogida temporal los albergues y pisos de acogida para personas sin hogar o para personas en situación de exclusión, personas refugiadas o asiladas u otros colectivos en situación de falta de alojamiento.

Artículo 9. Requisitos generales de las personas beneficiarias

1. Carecer de patrimonio suficiente y no disponer de recursos o ingresos económicos para afrontar los gastos derivados de la situación de emergencia.

2. Disponer de la propuesta técnica en el cual se determine la necesidad de la acción objeto de la ayuda y se haga constar que se han agotado todos los recursos existentes encaminados a resolver la necesidad.

3. Residir de manera efectiva en el municipio de Alfafar

4. Acreditar la situación de necesidad.

5. Aportar la documentación requerida en cada caso.

6. Aceptar expresamente, por parte de la persona usuaria, las condiciones de la intervención social si procede.

7. Haber solicitado aquellas prestaciones a las cuales pudiera tener derecho (prestaciones del Servicio Estatal de Ocupación y /o de la Seguridad Social, pensión alimenticia a favor de personas menores de edad, becas de comedor y guardería), y cualquier otra prestación, recurso o servicios que pueda favorecer la cobertura de la situación de emergencia existente.

8. En su caso, haber justificado el pago de la ayuda concedida anteriormente.

9. Que en la unidad familiar de convivencia no exista absentismo escolar en ninguno de los miembros que se encuentran en edad de escolarización obligatoria.



10. No disponer de otra ayuda o prestación para el mismo fin otorgado por organismo público o privado distinto. No obstante, si el importe de la prestación o los ingresos que percibe no superan los límites del ingreso establecidos en la presente ordenanza podrán solicitar la PIES que en la misma se regula, para complementar dicha ayuda

11. Que la ayuda solicitada no sea competencia otros organismos públicos

12. Que su renta o, en caso de formar parte de una unidad de convivencia la renta conjunta anual de la unidad de convivencia a la cual se pertenece, sea igual o inferior a 1'5 veces (IPREM) de 14 pagas. Cuando la unidad de convivencia esté formada por más de una persona, el multiplicador de renta respecto al índice IPREM de 14 pagas se incrementará en 0'3 por cada miembro adicional, estableciéndose el límite máximo de 3 veces IPREM de 14 pagas.

Esta cuantía podrá ser superada si por prescripción técnica o causas sobrevenidas consideradas.

a) A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos, se tendrá en cuenta, además de las rentas u otros bienes patrimoniales o circunstancias que declare la persona solicitante, los signos externos que manifiestan su real capacidad económica, denegándose el derecho a la petición, siempre y cuando desmientan la declaración emitida por la persona solicitante.

b) Para valorar la existencia de patrimonio suficiente se tendrá en cuenta la titularidad de los bienes inmuebles siempre que no constituya la vivienda habitual de la persona solicitante, así como los rendimientos del capital mobiliario.

c) No disponer de liquidez en las cuentas bancarias de la unidad de convivencia de más de 1'5 del IPREM

d) No disponer de bienes muebles, exceptuando el vehículo de uso personal, diferentes de las cuentas bancarias de toda la unidad de convivencia de más de 2 veces el IPREM o de bienes inmuebles (sin contar la vivienda habitual), sobre los que tengan derecho de propiedad, usufructo o cualquier otro que, por sus características, valoración, posibilidad de explotación o venta, de tal suerte que sea evidente la inexistencia de medios suficientes para atender a la necesidad para la cual se solicita la ayuda.

13. En el caso de personas desocupadas, estar inscritas como demandantes de ocupación en las oficinas LABORA y estar al corriente en las revisiones de la demanda de ocupación y llevar a cabo una búsqueda activa del mismo, siempre que sea posible dadas las situaciones de vulnerabilidad.

14. No haber sufragado el gasto objeto de la ayuda solicitada con anterioridad a la petición de la misma (excepto en los casos contemplados en el artículo 5.6)

15. Disponer de la prescripción técnica en la cual se determine la necesidad de la acción objeto de la ayuda y se haga constar que se ha agotado todos los recursos existentes encaminados a resolver la necesidad por los servicios técnicos municipales

16. No se podrá solicitar ayuda por el mismo concepto si en los dos meses anteriores se solicitó la misma, a excepción de la ayuda por alimentación y prevención. Anterior a la presentación de la solicitud, durante un periodo no inferior



a 6 meses, salvo situaciones excepcionales debidamente acreditadas en el correspondiente informe social.

Las personas beneficiarias, de acuerdo con el artículo 13.2, letra e), de la Ley General de Subvenciones, dada la naturaleza de la subvención, quedarán exonerados del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Artículo 10. Órganos competentes

A los efectos de la presente Ordenanza serán órganos competentes para la Instrucción, resolución y pago de las mismas los siguientes órganos

1. La instrucción de los expedientes relativos a las ayudas objeto de la presente ordenanza se realizará por el departamento de atención primaria de servicios sociales.
2. La resolución del procedimiento de concesión/denegación de las ayudas corresponde a la Alcaldía.
3. La Alcaldía es el órgano competente para la aprobación del pago y de la justificación de la subvención.

Artículo 11. Procedimiento de adjudicación

El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva, previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.

Artículo 12. Publicidad de la convocatoria

La convocatoria anual se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en su página Web www.alfafar.com así como en el portal de transparencia del Ayuntamiento.

La convocatoria se considerará abierta en tanto exista consignación presupuestaria.

Artículo 13. Habilitación del crédito económico

Se habilitará la correspondiente consignación municipal en las siguientes partidas:

La concesión de ayudas quedará supeditada al límite de existencia de consignación presupuestaria, procediéndose a la modificación de crédito cuando fuera necesario, conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 3/2019 de Atención Primaria de Servicios Sociales Inclusivos.



Artículo 14. Gastos subvencionables

Podrán ser elegibles los gastos que cumplan los requisitos y objetivos de esta ordenanza, teniendo en cuenta las exclusiones previstas en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 que aprueba el reglamento de subvenciones y las resoluciones y criterios interpretativos de la IGAE.

TÍTULO II: PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS PEUS.

1. ASPECTOS GENERALES

Artículo 15. Objeto

Constituye el objeto de esta normativa la regulación del procedimiento para la concesión de Prestaciones Económicas Individualizadas (PEUS) en el Ayuntamiento de Alfafar. Estas ayudas están dirigidas a personas individuales, núcleos familiares o unidades de convivencia que no puedan resolver con medios propios una situación gravemente deteriorada, de urgente necesidad o con graves problemas específicos que afectan a su autonomía personal, social y económica, siendo siempre un apoyo a la intervención social.

Para la diferenciación de tipologías PEUS es necesario tener en cuenta las siguientes definiciones:

- a) **Emergencia social:** La emergencia social es una situación sobrevenida e imprevista en el que objetivamente la persona o grupo de personas se encuentran de forma repentina sin medios personales, familiares o sociales para dar respuesta a sus necesidades básicas.
- b) **Urgencia social:** Se trata de una situación imprevista resultado de procesos continuos en el tiempo, o no, y que, de no tener una respuesta, puede generar o incrementar una situación de vulnerabilidad, desprotección y exclusión social en las personas y grupos que la sufren, afectando a la cobertura de sus necesidades.
- c) **Gastos subvencionables:** Las ayudas podrán otorgarse a personas concretas, con carácter periódico o por una sola vez en el ejercicio económico, por servicios esporádicos o adquisiciones puntuales de productos de primera necesidad.

Artículo 16. Tipología y características de las prestaciones económicas individuales.

Las ayudas podrán ser de cinco tipos:

- a) **PEUS DE URGENCIA SOCIAL**
- b) **PEUS DE EMERGENCIA SOCIAL**
- c) **PEUS PARA EL SUMINISTRO BÁSICO ENERGÉTICO**
- d) **PEUS PARA LA MEJORA DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACITADO**
- e) **PEUS DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL**



a) **PEUS DE EMERGENCIA SOCIAL:**

Se considerarán situaciones de emergencia social las siguientes:

➤ **Necesidades básicas:**

- Renta básica municipal: Entendiéndose por tal la prestación económica destinada a cubrir necesidades básicas, dirigidas a unidades familiares que hayan agotado todas las prestaciones que puedan corresponder a cualquier miembro de la unidad de convivencia por parte otras Administraciones públicas o entidades privadas, o habiéndolas solicitado, estas estén pendiente de resolución, siempre que no tengan carácter retroactivo la concesión de la misma.

- Alimentación básica, productos de carácter infantil de primera necesidad, productos de alimentación específica por alergias o intolerancias alimentarias.

- Productos de higiene personal, prendas y calzado básico, y productos de limpieza doméstica.

➤ **Gastos imprescindibles para el uso de la vivienda habitual:** Ayuda para alquiler de vivienda habitual. Amortización préstamo bancario. Entradas vivienda (fianza, arrendamientos...). Importes pendientes en evitación de desahucio. Pequeños arreglos de vivienda habitual cuando estos se consideran imprescindibles para la permanencia en el domicilio. Adquisición de mobiliario y pequeños electrodomésticos cuando estos se consideran imprescindibles para las necesidades básicas y en situaciones excepcionales. Limpiezas, desinfecciones y desinfección en situaciones excepcionales. Alojamiento alternativo. Gastos derivados de la comunidad.

➤ **Gastos de movilidad:** por desplazamientos o de transporte debidos a asistencia a tratamientos médicos, de formación o búsqueda laboral, para tramitación de documentación legal básica o por situaciones excepcionales

➤ Así mismo se cubrirán gastos excepcionales dada la situación de pobreza o fragilidad cubriendo aquellos gastos de prótesis oculares, odontológicas, podológicas, farmacéuticas, ortoprotésicos de vital necesidad para la persona solicitante que no estén cubiertos por el sistema público sanitario.

b) **PEUS DE URGENCIA SOCIAL**

Todas aquellas prestaciones económicas de carácter puntual y no repetitivas que puedan cubrir la prevención de sufrir una situación de exclusión social dado una situación repentina o de forma precipitada. Pueden ser contingencias vitales estresantes, inesperadas y generalmente de aparición súbita, o situaciones producidas por un hecho no previsto, por culpa de causas naturales o provocadas, que afectan y comprometen las capacidades personales.

c) **PEUS PARA EL SUMINISTRO BÁSICO ENERGÉTICO**

Ayudas económicas complementarias, familiares y no periódicas que permiten paliar, minimizar e incluso atajar el problema de suministro de gas, agua y electricidad, el fin del cual es garantizar un periodo mínimo de cobertura en aquellos hogares que puedan sufrir las consecuencias de la pobreza energética.



d) **PEUS PARA LA MEJORA DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES**

Comprende todas aquellas medidas que posibilitan a las personas con problemas motrices o sensoriales su mantenimiento en el mismo entorno, incrementando su autonomía, potenciando las posibilidades, favoreciendo las relaciones y la integración en la sociedad, tales como:

- Ayudas técnicas considerándose cómo tales la adaptación funcional del hogar y la adquisición de útiles y enseres necesarios para el desarrollo en la vida ordinaria, entre otras pueden considerarse instrumentos de comunicación, ayudas para autonomía para la vida diaria, no considerando aquellas que, aun siendo una mejora del hogar, estén directamente relacionadas con impedimentos físicos o sensoriales como son los electrodomésticos, ni obras o reformas.

- Requisitos para cumplir en su totalidad de las personas beneficiarias de ayudas de desarrollo personal:

1. Ser mayor de 60 años
2. Que existan deficiencias de carácter motor o sensorial en la persona solicitante que le impidan o dificultan su movilidad a través de medios normales.
3. Que la solicitud esté referida a elementos relacionados con las necesidades de accesibilidad y comunicación, siendo excluidos los que significan una mejora en el hogar/edificio que no esté directamente relacionada con los impedimentos físicos y/o sensoriales.
4. Idoneidad de lo solicitado para cubrir la necesidad que plantea la persona solicitante.
5. No tener acceso a ayudas de otras Administraciones públicas o recursos propios que cubran esta necesidad y que, junto con la ayuda solicitada, superen el concepto para el cual se pide la citada ayuda.

e) **PEUS DE PREVENCIÓN A LA EXCLUSIÓN SOCIAL**

Gastos que por circunstancias de grave necesidad social son prescritas facultativamente por profesionales del equipo de atención primaria de servicios sociales y pueden atender en sus prestaciones profesionales una intervención social previniendo la exclusión y favoreciendo la igualdad, dignidad y respeto, favoreciendo la inclusión en el contexto social y cultural, favoreciendo la plena autonomía, potenciando las relaciones y conexiones sociales, proporcionando capacidades y recursos y abordando la desigualdad desde la justicia social.

Estas ayudas estarán prescritas priorizando a las niñas, niños y adolescentes, así como a personas con discapacidad mental grave, o discapacidad severa atendidas en sus domicilios, incluyendo en sus familias, atendiendo a las personas diagnosticadas de vulnerabilidad o riesgo de exclusión impidiendo el desbordamiento o claudicación familiar en las curas o el vertido al abandono o desamparo familiar.



Artículo 17. Cuantías

a) PEUS DE EMERGENCIA SOCIAL:

NECESIDADES BÁSICAS

La cuantía de la prestación dependerá del número de miembros de la unidad de convivencia

- a) 1 persona adulta: 75% del IPREM mensual
- b) 2 personas adultas: 85% del IPREM mensual
- c) Más de 3 personas adultas: 95% del IPREM mensual
- d) el IPREM se verá incrementado un 10% por cada una de las personas adultas que componen la unidad familiar

En cualquier caso, no se concederá prestaciones económicas superiores a 1'5 del IPREM, excepto por prescripción facultativa debidamente fundamentada. Los umbrales máximos a conceder serán en cualquier caso los regulados por la Conselleria que tenga competencia en materia de servicios sociales.

A la cuantía mensual establecida se sumará un complemento de monomarentalitat o monoparentalidad equivalente al 10% más, en el supuesto de la unidad de convivencia. A los efectos de determinar la cuantía de la prestación, se entenderá por unidad de convivencia monomarental o monoparental la constituida por solo una adulta o adulto con una hija o hijo o más personas menores de edad que se conviva, o bien estén en régimen de acogida familiar permanente o guarda con fines adoptivos a cargo suyo, cuánto constituye la persona sustentadora única de la unidad de convivencia, justificando documentalmente con el título de familia monomarental o monoparental emitido por la Conselleria que tenga competencia en materia de servicios sociales.

b) PEUS DE URGENCIA SOCIAL

- 1. Prótesis oculares: Módulo máximo 90% IPREM mensual.
- 2. Necesidad odontológica no cubiertas por fundaciones o la sanidad pública: Módulo máximo 90% de IPREM mensual
- 3. Necesidades podológicas: Módulo máximo 60% IPREM mensual.
- 4. Gastos farmacéuticos: Módulo máximo 20% IPREM mensual del tratamiento no cubierto por la sanidad pública
- 5. Tasas para la tramitación de documentación: Módulo máximo 65% de IPREM mensual.
- 6. Productos ortoprotésicos no cubiertos por la Seguridad Social: Módulo máximo 100% IPREM anual en 12 pagas.
- 7. Adquisición de mobiliario básico y electrodomésticos de primera necesidad para la vivienda habitual: hasta el 50% de IPREM anual en 12 pagas
- 8. La vivienda habitual: al 50% de IPREM anual 12 pagas.



9. Gastos de comunidad de vecindad: hasta el 10% de IPREM anual 12 pagas.
10. Alojamiento alternativo: hasta el 14% de IPREM mensual 12 pagas
11. Varios: Módulo máximo 70% de IPREM mensual, cuando se presentan situaciones sobrevenidas.

c) **PEUS PARA EL SUMINISTRO BÁSICO ENERGÉTICO**

Máximo se abonará el 80% de la deuda corriente de suministro básico de luz, agua y gas.

d) **PEUS PARA LA MEJORA DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES**

1. Audífonos, hasta el 30% de IPREM anual 12 pagas
2. Gafas hasta el 30% de IPREM anual 12 pagas
3. Enseres para la autonomía de la vida diaria hasta el 30% de IPREM anual 12 pagas

e) **PEUS DE PREVENCIÓN A LA EXCLUSIÓN SOCIAL, con prescripción facultativa**

1. Necesidades de integración social: Módulo máximo 100% de IPREM mensual.
2. Actividades culturales y de ocio en la niñez o adolescencia: hasta el 100% del presupuesto presentado

TÍTULO III PROCEDIMIENTO

Artículo 18. Inicio del procedimiento.

La solicitud, a instancia de parte, deberá de presentarse en el modelo normalizado, que es de uso obligatorio, debidamente formalizado y firmado por la persona solicitante. También puede ser iniciada de oficio mediante informe emitido por las personas profesionales técnicas municipales de servicios sociales, que pondrán en marcha el expediente a todos los efectos.

Esta solicitud contiene una petición de autorización y tratamiento de datos personales que deberá de autorizar la persona solicitante, igual que todos los miembros de su unidad de convivencia de edad mayor a 14 años.

Dicha solicitud se registrará bien de forma personal en el registro de la oficina de atención ciudadana SAC o mediante presentación telemática en la sede electrónica del ayuntamiento.



Artículo 19. Plazo de presentación.

El plazo de presentación será durante todo el año, dado el objeto de las prestaciones económicas de emergencia y urgencia social.

Artículo 20. Subsanación de solicitudes.

Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o no se acompañe la documentación exigida, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe a los documentos preceptivos, con indicación que, si así no lo hiciera, se considerará desistida su petición, y se procederá al archivo del expediente, previa resolución que deberá de ser dictada en los plazos previstos en el art. 21 de la Ley 39/2015, antes citada.

Artículo 21. Instrucción general del procedimiento.

1. La instrucción del expediente corresponderá al Equipo Técnico de Atención Primaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Las solicitudes de ayudas serán remitidas al Servicio de Atención Primaria del Ayuntamiento de Alfafar.

Posteriormente, la persona técnica que instruya el expediente podrá efectuar las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por la ciudadanía.

2. Una vez verificadas las solicitudes en la forma prevista, se emitirá la correspondiente propuesta de prescripción técnica, teniendo que incluir una propuesta favorable o desfavorable, debidamente motivada según Informe-baremo establecido.

3. Para la concesión de las ayudas se estará a lo que se dispone en cada una de sus modalidades.

4. La propuesta de prescripción favorable, en todo caso, hará referencia a los siguientes aspectos:

- Persona beneficiaria.
- Problemática planteada (necesidad técnica de la ayuda).
- Modalidad que se considera adecuada, especificando conceptos y cantidades.

5. Se considerarán causas de denegación de la propuesta de concesión de las ayudas las siguientes:

- No cumplir los requisitos para acceder a estas.
- Incumplimiento de las obligaciones respecto a las niñas, niños o adolescentes: escolarización y asistencia en el centro escolar, vacunación, seguimiento médico...



- Ser baja voluntaria en un trabajo o rechazar ofertas de ocupación sin causa justificada.
- Rechazar ofertas de formación sin causa justificada.
- No estar inscrito como demandante de ocupación, cualquier miembro de la unidad de convivencia mayor de 16 años sin causa justificada.
- No cumplir con las obligaciones del programa de intervención social planteado por las personas profesionales técnicas.
- Recibir ayudas de otras entidades en el mismo objeto de la solicitud.
- No haber justificado otra prestación económica concedida anteriormente una vez finalizado el plazo previsto al efecto, o haberla justificado indebidamente.
- Falseamiento u obstaculización de los datos necesarios para obtener la ayuda.
- Desistimiento de la persona solicitante.
- Por ser incompatibles de conformidad con la presente ordenanza.
- Cualquier otro supuesto que impida o desnaturalice el objeto de la ayuda solicitada antes de ejecutar su abono.

6. Las propuestas técnicas de prescripción, favorables o desfavorables, serán presentadas y validadas en la Comisión Técnica de Valoración y seguimiento de las Prestaciones Económicas, regulada en el artículo 39 del Decreto 38/2020, modificado por el Decreto 188/2021, que se constituye como órgano colegiado de ámbito zonal, con el fin de valorar y proponer respuestas individualizadas a las solicitudes presentadas en materia de prestaciones económicas de competencia local.

Artículo 22. Documentación general a aportar.

La solicitud, a instancia de parte, tendrá que ir acompañada de la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos regulados en la ordenanza que en este artículo se señala:

a) Solicitud de ayudas públicas, según modelo oficial, suscrito por la persona beneficiaria o por su representante, debidamente cumplimentada en su integridad.

b) Documentación que debe contener el expediente de todos los miembros de la Unidad de Convivencia:

1. Identificación, mediante la siguiente documentación:

a) DNI /NIE/tarjeta de residencia o pasaporte. En el caso de los menores de 14 años que no tengan documento nacional de identidad, fotocopia del libro de familia o certificado literal de nacimiento.

b) Cuando la persona solicitante y los miembros de su unidad de convivencia tengan condición de refugiadas, asiladas o desplazadas forzosamente tendrán que presentar un documento de identidad. En caso de haber presentado la solicitud de asilo o autorización de estancia por razones humanitarias, y cuando la



misma se encuentre en trámite, se acreditará mediante certificado del organismo correspondiente.

c) Cuando la persona solicitante tenga la condición de apátrida, deberá aportar la tarjeta acreditativa del reconocimiento de esta condición.

d) Cuando la persona solicitante tenga derecho a la protección subsidiaria contemplada en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria, tendrá que acompañar la documentación acreditativa de esta circunstancia, con certificación del organismo competente de su admisión a trámite, en caso de no estar resuelta.

e) En el supuesto de encontrarse en situación irregular, tendrá que presentar ante los Servicios Sociales cualquier documento que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como, si procede, de la relación conyugal o de filiación o de parentesco.

f) Cuando la persona solicitante se encuentre en cualquier otra situación de vulnerabilidad, tendrá que acompañar la documentación acreditativa de esta circunstancia.

2. Libro de familia
3. SIP
4. Sentencia de separación o divorcio y convenio regulador, si procede
5. Extracto bancario del pago de pensión compensatoria o de alimentos, si procede
6. Vida laboral, mediante la siguiente documentación:
 - a) Certificado de la vida laboral obligatoriamente
 - b) Contrato de trabajo y las 3 últimas nóminas, autónomos mod 130-131
 - c) Certificado del SERVEF de prestaciones y tarjeta DARDE
 - d) En caso de que el solicitante o algún miembro de la familia esté trabajando por cuenta propia (autónomo), hay que aportar la última declaración de Hacienda o, en caso de no haberla hecho todavía para ser nueva actividad, la última declaración trimestral (modelo 101)
- e) Recibo bancario de la liquidación de cotizaciones donde conste la base de cotización a la Seguridad Social.
7. Justificación de ingresos económicos.
 - a) Cuando no se aporte ninguna acreditación de ingresos, se rellenará por la persona interesada una declaración responsable de ingresos conforme dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
 - b) Declaración de renta actual, o certificado negativo, o declaración jurada de ingresos
 - c) Certificado de pensiones del INSS
 - d) Copia de los movimientos de la cuenta bancaria de los últimos tres meses



- e) Justificante bancario en el supuesto de que el solicitante o algún miembro de la unidad de convivencia reciba pensión del extranjero.
8. Contrato de alquiler, o recibo de hipoteca
9. Modelo de reconocimiento de deuda por el propietario de la vivienda
10. Presupuesto o facturas del coste de la necesidad
11. Ficha de terceros
12. Otra documentación que el equipo técnico considere oportuno

La presentación de la solicitud de ayuda implica la autorización a favor del Ayuntamiento de Alfafar para comprobar de oficio el Certificado de empadronamiento y convivencia. En caso de la no existencia de empadronamiento pero sí de residencia efectiva, se considerará justificada tener asignada asistencia médica o estar inscrito como demandante de ocupación o tener descendientes escolarizados u otros supuestos justificables bajo criterio profesional.

En la solicitud, todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años podrán realizar autorización expresa al Ayuntamiento de Alfafar para recaudar el órgano instructor los datos de carácter personal e información patrimonial necesarios para la tramitación del expediente, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), del Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE) y de Catastro. Esta autorización también incluye el tratamiento de estos datos.

Artículo 23. Resolución y Notificación

1. Las ayudas económicas que se regulan en la presente ordenanza se resolverán por Resolución de Alcaldía.

2. El plazo de resolución y su correspondiente notificación será de un mes contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el correspondiente registro de acuerdo con lo establecido en la ley 9/2016 de la Generalitat de 28 de octubre, de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana. El plazo establecido quedará interrumpido cuando el procedimiento se paralice por causa imputable a la persona solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. La resolución será motivada, debiendo quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución, y deberá contener la relación de personas solicitantes a las que se concede las prestaciones y sus cuantías, constando de forma expresa la desestimación del resto de solicitudes.

4. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a la persona interesada o interesadas para entenderla estimada por silencio administrativo de acuerdo con el artículo 3.2 de la ley 9/2016 de la Generalitat de 28 de octubre, de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana.

5. La resolución se notificará en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



Artículo 24. Finalización del procedimiento

Los motivos de finalización del procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 39/2015, serán los siguientes, previo trámite de audiencia y resolución adoptada sobre este tema:

- a) Desistimiento de la solicitud: por incomparecencia o por no aportar la documentación señalada en la Ordenanza.
- b) Renuncia al derecho.
- c) Por imposibilidad material de continuar con el procedimiento por causas sobrevenidas: por defunción de la persona solicitante, desaparición de las circunstancias o situación de necesidad que motivó la concesión de la ayuda o por traslado de domicilio en otro municipio.

Artículo 25.- Recursos.

Las resoluciones, expresas o presuntas, dictadas por el órgano competente del Ayuntamiento de Alfafar ponen fin a la vía administrativa, y contra ellas se podrá interponer potestativamente recurso de reposición, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado del Contencioso-Administrativo de Valencia en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, o de seis meses si el acto fuera presunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, sin perjuicio que pueda interponerse cualquier otro que se estime pertinente.

Artículo 26. Protección de datos

En cuanto al uso y protección de los datos contenidos en esta documentación, tendrá que estarse al que se dispone en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

TÍTULO IV. DEL PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 27. Abono de la ayuda

La gestión presupuestaria de las ayudas recogidas en la presente ordenanza se efectuará por el órgano de gestión presupuestaria, que emitirá la correspondiente propuesta de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación con cargo a la partida destinada a este fin y con el límite de los créditos consignados en la misma; y se harán efectivas a través del sistema transferencia bancaria, en la modalidad de pago directo o diferido, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido



de la Ley reguladora de las Haciendas Locales; el RD 500/1990; y las bases de ejecución del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento.

La Alcaldía es el órgano competente para la aprobación del pago y de la justificación de la subvención.

Artículo 28. Régimen de pagos

El pago de las ayudas se efectuará a la persona solicitante. No obstante, lo anterior, a propuesta de las personas profesionales técnicas que tramitan la ayuda y dejando constancia en su prescripción, el pago de la ayuda se podrá efectuar a persona diferente a la solicitante en los siguientes supuestos:

- a) Documento notarial o judicial que acredite la provisión de medidas de refuerzo, en que en el caso el pago se efectuará a la persona designada.
- b) Imposibilidad por parte de la persona solicitante de abrir cuenta bancaria para hacer transferencia bancaria, tener embargada la cuenta o con deudas pendientes que imposibilitaran el efectivo cobro de la ayuda. En tales casos, el pago de la ayuda tendrá que efectuarse a la persona que autoriza la persona usuaria o, en su defecto, a la persona a la cual legalmente le corresponda la representación.
- c) En caso de que sea necesario y la PEUS esté orientada al pago de una deuda se podrá facilitar el pago directo a la entidad prestamista del servicio.

Artículo 29. Justificación del gasto

1. La justificación se acreditará mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa y se presentará en el Departamento de Servicios Sociales, por cuantía igual o superior al importe concedido en la resolución. La justificación se tendrá que efectuar una vez haber efectuado uso de la ayuda y en todo caso en el plazo máximo de 2 meses siguientes a la fecha de concesión. En el caso de suministros energéticos se dispondrá de 10 días para la justificación.

2. La falta de justificación o justificación insuficiente, además de la anulación de la subvención, podrá llevar aparejada la pérdida de la condición de persona beneficiaria para futuras subvenciones, sin perjuicio del reintegro de fondos, en su caso.

3. El pago de la subvención podrá ser fraccionado, previa justificación. El pago podrá realizarse anticipadamente a la justificación de la subvención, tanto en la modalidad de pago único como pago fraccionado, sin necesidad de aportar garantías dada la naturaleza de las ayudas.

4. Se intentará, en la medida de lo posible, realizar el pago a la persona acreedora del servicio en función de las características de la emergencia. Si esto no es posible o dificulta la tarea administrativa se realizará el pago a la persona peticionaria que dispondrá de un plazo máximo de 1 mes para justificar el importe de la ayuda.



5. Para la modalidad de Renta Básica Municipal, será de aplicación lo preceptuado en el punto 7 del artículo 30 de la LGS, por lo que la justificación consistirá en la acreditación por cualquier medio admisible en derecho, de la situación de precariedad que justificaría la aplicación de esta prestación

6. A efectos de control de la concurrencia de la ayuda municipal con subvenciones otorgadas por otros organismos para las mismas situaciones, actividades o circunstancias, los documentos originales acreditativos del gasto se deberán invalidar mediante sistema de estampillado que haga constar que dicho gasto ha sido aplicado a la subvención correspondiente, indicando en el mismo el importe concedido, cuando éste no coincida con el total del justificante. Asimismo, si los gastos fueran soportados por distintas cofinanciadoras, deberá hacerse constar el porcentaje de imputación correspondiente a la ayuda municipal.

TÍTULO V. DEL REGIMEN DE INFRACCIONES

Artículo 30. Infracciones y Sanciones

1. A estas ayudas les será aplicable el régimen de infracciones y sanciones que establecen los capítulos I y II del título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y lo artículo 43 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Alfajar y sus Organismos Públicos.

2. Si el órgano que otorga, a consecuencia de su actuación de comprobación, o la Intervención General, en el marco del procedimiento de control, aprecian la concurrencia de algún motivo de infracción, tendrán que instar el inicio del procedimiento sancionador, de acuerdo con el que dispone la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el citado artículo 43 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Alfajar y sus Organismos Públicos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las solicitudes de PEIS que se encuentran en trámite o en fase de recurso administrativo en la fecha de entrada en vigor de la presente ordenanza, les resultará de aplicación lo dispuesto en esta, en aquellos supuestos que implican una mejora de la prestación y que cumplan los requisitos establecidos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza de prestaciones económicas individualizadas del Ayuntamiento de Alfajar, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Alfajar, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2020,

DISPOSICIÓN FINAL

De acuerdo con el que establece la ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen local en el artículo 70.2 las normas locales no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo de 15 días previsto en el artículo 65.2.



ORDENANÇA REGULADORA DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'URGÈNCIA SOCIAL

TÍTOL PRELIMINAR.

PART I. EXPOSICIÓ DE MOTIUS I MARC NORMATIU

La Constitució Espanyola configura un Estat social i democràtic de dret enumerant els principis rectors de la política social, obligant els poders públics a inspirar en aquells la seua política social. Este mandat ve recollit en el Títol I, Capítol III, la concreció del qual es materialitza a través dels articles 9.2 i 14 del mateix cos legal, configurant la base d'un sistema públic de Servicis Socials. En este àmbit i derivat del sistema de distribució competencial regulat en la pròpia norma constitucional i a través de l'article 148.1. 20a s'atribueix a les Comunitats Autònomes la competència relativa a l'assistència social.

La Llei orgànica 1/2006 de 10 d'abril, de Reforma de Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el seu article 49.1.24, assumeix efectivament competències exclusives en matèria de servicis socials.

Així mateix, la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en el seu article 25.2 e) estableix que el Municipi exercirà, en tot cas, com a competència pròpia les següents matèries: e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i d'atenció immediata a persones en situació de risc o exclusió social.

D'altra banda, l'article 26.1.c) regula que en els Municipis amb població superior a 20.000 habitants tindran, a més, competència en protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació de risc o exclusió social.

Finalment, i pel que respecta a la normativa sectorial en la matèria, l'article 29.1 b) de la Llei 3/2019 de 18 de febrer de la Generalitat Valenciana, d'Atenció Primària de Servicis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, estableix les competències municipals en la provisió i gestió dels Atenció Primària de Servicis Socials d'atenció primària de caràcter bàsic, en relació amb l'article 18.1 del mateix text legal.

De conformitat amb la Llei 3/2019, es garantirà l'accés al sistema i a les prestacions integrades en el seu catàleg com un dret subjectiu, de conformitat amb l'aplicació real i efectiva dels drets socials disposada en l'article 10 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i bandejarà el caràcter discrecional que l'ha dominat tradicionalment.

L'article 3.3, regula el Dret Subjectiu com a dret que concedeix a la persona titular del mateix la facultat d'exigir el compliment a l'administració pública competent, que té l'obligació de garantir-lo d'acord amb la legislació vigent. Es reconeixen com a drets subjectius els servicis socials, així com les prestacions garantides reconegudes com a tals en esta llei.

Per part seua, el títol II regula el Catàleg i Cartera de Prestacions del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials, amb l'objectiu de determinar el conjunt de prestacions, i concretar la regulació dels elements propis de cada una, diferenciant les prestacions garantides, caracteritzades per la seua exigibilitat com a dret



subjectiu i amb crèdit ampliable (art. 32), de les condicionades, subjectes a disponibilitat pressupostària.

L'article 31, relatiu al concepte i tipus de prestacions, estableix en el punt 1. què s'entén per prestacions del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials i les actuacions que s'ofereixen a la ciutadania, d'acord amb els articles 3 i 5 d'esta llei.

En el punt 2, regula que les prestacions del Sistema Públic Valencià d'Atenció Primària de Servicis Socials podran ser:

a) Prestacions professionals: comprenen el conjunt d'intervencions de caràcter temporal o permanent, dirigides a la prevenció, rehabilitació, diagnòstic, atenció en les situacions de necessitat social i promoció de l'autonomia i la inclusió social de la ciutadania, així com l'atenció sociosanitària i socioeducativa d'esta.

b) Prestacions econòmiques: consisteixen en lliuraments dineraris, de caràcter puntual o periòdic, proveïdes per les administracions competents a fi de millorar la qualitat de vida i l'autonomia, l'atenció a situacions d'urgència, l'atenció sociosanitària o la cobertura de les necessitats bàsiques, que permeten a la ciutadania aconseguir un nivell de vida digne.

c) Prestacions tecnològiques: comprenen aquelles prestacions d'assistència tecnològica i ajudes de caràcter instrumental destinades a la protecció, manteniment o millora de l'autonomia i la inclusió social i garantia per a l'accessibilitat universal.

En l'exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, les administracions públiques han d'actuar d'acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència.

Els principis de necessitat i eficàcia, queden justificats per raó d'interés general, en garantir-se l'establiment d'un marc normatiu sòlid i estable que faça previsible l'actuació de l'Administració pública i incremente la seguretat jurídica en les seues relacions amb esta. Constitueix un instrument més per a garantir la correcta atenció i intervenció professional a qualsevol persona que necessite dels servicis, prestacions o assessorament sobre els seus drets, dins d'un sistema de protecció social.

En virtut del principi de proporcionalitat, esta ordenança conté la regulació mínima i imprescindible per a establir un règim previsible en l'execució de les polítiques socials i en la distribució de les prestacions econòmiques incloses en la cartera de servicis de l'Ajuntament.

En aplicació del principi de transparència, en els termes que estableix l'article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'acord inicial d'este ordenança es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Alfajar amb la finalitat de fer efectiu el tràmit d'audiència a la ciutadania i obtindre quantes al·legacions puguen fer-se per altres persones o entitats. L'aprovació definitiva es realitzarà segons el procediment de l'article 70.2 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i a més estarà a la disposició de la ciutadania en el Portal de Transparència.



En aplicació del principi d'eficiència, la fixació del règim de les prestacions econòmiques permetrà l'homogeneïtzació del sistema i garantirà l'equitat en la redistribució dels recursos públics que s'empren en els servicis socials.

La millora de protocols i processos d'atenció pretenen situar a la persona com a centre, imperatiu este al qual obliga l'excel·lència, la qualitat en l'atenció.

Descriure les situacions, diagnosticar-les i pronosticar-les en el pla personalitzat d'intervenció social és un dret de la ciutadania per a una resolució més efectiva i satisfactòria de la demanda dels nostres servicis i la seua aplicació és una bona manera de gestionar la gestió dels recursos públics.

Conforme al que es preveu en la normativa de referència, el Ple de l'Ajuntament d'Alfàfar, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de juny de 2020, va acordar l'aprovació inicial de l'Ordenança de prestacions econòmiques individualitzades, actualment vigent.

No obstant això, la catàstrofe esdevinguda el passat 29 d'octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, amb conseqüències especialment greus i tràgiques en determinats municipis i zones de la província de València, entre ells, el municipi d'Alfàfar i, en concret, el nucli urbà del Barri Orba, que s'ha convertit en el, fins a la data, major desastre natural en la història recent d'este país, requereixen de l'actualització normativa de la regulació de les mesures en matèria de protecció social existent i, per tant, la revisió de l'Ordenança vigent.

PART II. FONAMENTACIÓ

L'Atenció Primària de Servicis Socials municipals tenen com una de les seues funcions i tasques més consolidades la de proporcionar atenció i ajuda a persones que travessen una situació vital de dificultat, derivada, en la majoria dels casos, de la impossibilitat de fer front a determinades despeses que, o bé són necessaris per al manteniment d'una forma de vida compatible amb la dignitat a la qual tota persona té dret o que fins i tot, són precisos en determinades ocasions, per a la supervivència.

L'Ajuntament, com a administració pública, requereix disposar d'una normativa àgil i efectiva, de manera que puga conciliar-se l'atenció a les persones en situació d'emergència social amb la normativa i els procediments propis de l'administració i els que són aplicables en estos casos.

La present normativa tracta d'unir els dos requisits -atenció efectiva a les necessitats socials i compliment normatiu- posant especial èmfasi en l'agilitat del procediment, ja que una part important de l'eficàcia de la prestació econòmica resideix en quina puga ser coberta amb immediatesa i atenent la urgència que en determinats casos es planteja.

TÍTOL I. ASPECTES GENERALS

Article 1. Règim jurídic

a) Les prestacions econòmiques individualitzades (d'ara en avant PEUS) són un dret subjectiu en els termes establits en la llei 3/2019 d'Atenció Primària de Servicis Socials de la Generalitat (article 32) i la seua normativa de desenrotllament,



que es concreta a través d'actuacions de caràcter econòmic dirigides a persones individuals o unitats de convivència.

La concessió d'estes prestacions es podrà regir per les ordes que approve la Conselleria amb competència en la matèria d'Atenció Primària de Servicis Socials segons el que s'estableix en la Llei 38/2003 General de subvencions, el Reial decret 887/2006 que aprova el reglament de subvencions, les resolucions i criteris interpretatius de la IGAE en matèria de subvencions i especialment pel que es preveu en la present ordenança.

En la matèria que ens ocupa regeixen també les lleis generals del procediment administratiu comú Llei 39/2015 d'1 d'octubre i la Llei 40/2015 de Règim jurídic del Sector públic, en el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques, i en les restants normes de dret administratiu que si és el cas siguen aplicables, i en defecte d'això, les normes de dret privat.

Així mateix, s'ajustarà al que s'estableix en l'Ordenança General de Subvencions, aprovada el 9 de novembre de 2017 pel Ple de l'Ajuntament d'Alfàfar i publicada en el BOP núm. 24, del 2 de febrer de 2019.

b) Pel que respecta al Procediment, les ajudes d'emergència social, tenen la consideració de "procediments d'emergència ciutadana" d'acord amb la Llei 9/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, de Regulació dels Procediments d'Emergència Ciutadana en l'Administració de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'ANNEX d'esta llei, que arreplega els Procediments administratius declarats d'emergència ciutadana establits en el punt 1. a) les Ajudes d'emergència social.

Per tant, segons els articles 3 i següents de l'esmentada Llei 9/2016, la seua tramitació té l'atribució del caràcter de procediment d'emergència, amb els efectes següents:

- La tramitació d'urgència del procediment, és a dir, la reducció a la meitat dels terminis per a resoldre i notificar el procediment que es tracte, excepte els terminis de presentació de sol·licituds i recursos.

- Efectes positius del silenci en aquells procediments d'emergència ciutadana que reconeguen un dret subjectiu per als seus sol·licitants, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament.

- L'obligació de l'Administració de vetlar per l'adequada dotació de recursos materials, econòmics i personals als departaments responsables de la tramitació dels esmentats procediments.

- S'estableixen limitacions en la realització de modificacions pressupostàries sobre aquelles aplicacions pressupostàries de la Generalitat destinades a finançar les prestacions vinculades als procediments declarats d'emergència ciutadana.

- Tindran caràcter prioritari i es tramiten també amb reducció de terminis en la mitat, l'autorització dels crèdits en els procediments declarats d'emergència.

- Els formularis de sol·licituds i les resolucions corresponents a este de procediments hauran d'estar redactats en llenguatge clar i intel·ligible i es reduirà al màxim la documentació a aportar pels sol·licitants.



- A més, estes ajudes es configuren com a ajudes econòmiques de caràcter extraordinari, destinades a pal·liar situacions o estats de necessitat, per la qual cosa, a fi de no desvirtuar la seua pròpia naturalesa, a les persones beneficiàries d'estes no li's exigirà el compliment de l'obligació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social estableix en l'article 13.2 e) de la Llei General de Subvencions.

- D'especial interès per a la gestió d'esta ordenança és l'apartat 2 de l'article 37 de la Llei 3/2019, que reflecteix que no podrà embargar-se aquella quantia, de les prestacions econòmiques incloses en este article, que no excedisca del salari mínim interprofessional, en virtut dels articles 606 i 607 de la Llei d'enjudiciament civil i resta de normes de l'ordenament civil.

Article 2. Objecte i àmbit d'aplicació

a) Mitjançant la present ordenança es regula la normativa aplicable i el procediment a seguir per a la sol·licitud i resolució de les prestacions econòmiques individualitzades en matèria d'Atenció Primària de Servicis Socials que atorga l'Ajuntament d'Alfajar i, en concret, les relatives als programes d'emergència i urgència social, subministrament energètic i despeses derivats de la tinença de la vivenda, accions extraordinàries i quantes prestacions per prescripció tècnica es consideren necessàries per a cobrir les necessitats vitals per a la subsistència de les persones.

b) Tindran per objecte pal·liar temporalment l'absència o la insuficiència d'ingressos d'acord amb el qual es determine en esta ordenança, també tindran caràcter preventiu davant les situacions de vulnerabilitat econòmica o financera, social, laboral i cultural de les persones facilitant la seua inclusió social i la cobertura de les seues necessitats bàsiques.

c) Les ajudes podran atorgar-se amb caràcter individual o a nuclis familiars o de convivència, amb caràcter periòdic o, quan es tracte de servicis esporàdics i adquisicions puntuals, per una sola vegada en l'exercici econòmic llevat que atenguen diversa finalitat.

d) Esta prestació serà garantida per a tota la ciutadania i per al conjunt de les prestacions econòmiques individualitzades que es realitzen en el terme municipal d'Alfajar, gestionades i finançades per l'Ajuntament, a través dels servicis socials, ampliant, en cas de ser necessari, els crèdits pressupostaris, per a atendre a totes les persones que tinguen prescripció social facultativa per a la seua necessitat.

e) L'àmbit d'intervenció territorial de l'Ajuntament d'Alfajar, en la seua condició d'administració local que presta l'Atenció Primària Bàsica en Servicis socials, serà l'adjudicat al Departament 9, Zona Bàsica 9.13.1 (Alfajar i Lloc Nou de la Corona) segons el que es preveu en el Decret 34/2021, de 26 de febrer, del Consell, de regulació del Mapa d'Atenció Primària de Servicis Socials de la Comunitat Valenciana.



Article 3. Principis rectors

Les prestacions econòmiques individualitzades tindran com a base l'orientació cap a la justícia social, el desenrotllament humà, l'enfocament comunitari, la perspectiva de gènere i la igualtat en la diversitat i es regiran pels principis rectors que s'enuncien a continuació:

a) Universalitat. Es garantirà l'accés als servicis socials a totes les persones, en condicions d'igualtat, accessibilitat universal i equitat, en el municipi d'Alfafar.

b) Responsabilitat Pública. Els poders públics garantiran l'existència de les prestacions mitjançant la dotació de personal, recursos tècnics i financers, de les infraestructures i equipaments necessàries per a assegurar l'exercici dels drets reconeguts.

c) Responsabilitat institucional a l'atenció. Es comptarà amb la figura de professional de referència, per a les persones que accedisquen a sol·licitar una prestació, compliran totes les seues actuacions. La finalitat és donar coherència i continuïtat a l'itinerari d'intervencions i garantir l'accés a les diferents prestacions i servicis. S'ha de procurar la continuïtat de l'atenció de les persones usuàries per tots els mitjans a l'abast de la institució, durant el període temporal en què la necessiten.

d) Prevenció. S'actuarà preferentment sobre les causes que originen les necessitats socials, donant la prioritat deguda a les accions preventives.

e) Promoció de l'autonomia personal. Es facilitaran els mitjans necessaris perquè les persones disposen lliurement dels suports i les condicions més convenients per a desenrotllar els seus projectes vitals.

f) Orientació centrada en la persona. Es garantirà l'atenció social personalitzada, integral i contínua, a partir d'una intervenció holística i afavorint una actuació transversal i coordinada.

g) Promoció de la intervenció per a la integració. Es procurarà la utilització de les prestacions per al manteniment de la persona en el mitjà convivència i comunitari, sempre que la prescripció ho considere més adequat.

h) Qualitat i professionalitat en la provisió dels servicis. S'establiran uns estàndards mínims de qualitat per a les prestacions socials, orientats a la seua millora contínua.

Article 4. Finalitat de la subvenció

a) Les prestacions econòmiques individualitzades (d'ara en avant PEUS) són un dret subjectiu que es concreta mitjançant actuacions econòmiques dirigides a persones individuals o unitats de convivència, a fi de posar remei a una situació greument deteriorada, de necessitat urgent o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no es pugen resoldre amb mitjans propis (Art 31.2 b), art. 32 i art. 37 de la Llei 3/2019).

b) El règim de concessió de les PEUS, sempre que complisquen els requisits, serà el de concessió directa.

c) La finalitat que es pretén és satisfer les necessitats bàsiques, pal·liar les situacions d'urgència social i desprotecció, promoure l'autonomia personal i en



general millorar les condicions de la qualitat de vida de totes aquelles persones que complixen els requisits regulats específicament per a l'accés a esta prestació.

d) Les actuacions davant situacions d'urgència social tindran caràcter prioritari davant qualsevol altra actuació, i quan es requerisquen prestacions o servicis, podran prestar-se sense que siguen exigibles per al seu accés tots o algun dels requisits establits. Així mateix, les prestacions seran garantides i gratuïtes mentres es mantinga la situació d'urgència social.

Article 5. Naturalesa i incompatibilitats.

Les Prestacions Econòmiques d'Urgència Social, mentres la seua finalitat d'atenció a la situació sobrevinguda, són inembargables, tenen caràcter finalista, i no són una fi en si mateixes, havent de destinar-se únicament a l'objecte per al qual han sigut concedides.

Les ajudes compreses en l'àmbit d'aplicació d'estes Bases Reguladores seran compatibles amb qualsevol altra prestació, dret o percepció econòmica procedents de qualsevol administració o ens públic o privat que poguera correspondre-li a la persona beneficiària o a un altre membre de la unitat familiar o de convivència, destinada a la mateixa finalitat, així com amb el gaudi gratuït de servicis que cobrisquen eixa mateixa necessitat.

Article 6. Persones beneficiàries

A l'efecte de la present Ordenança, podran tindre la condició de persona beneficiària tant les persones físiques com les unitats familiars o de convivència, considerant-se persones usuàries (segons el que es preveu en l'article 4.7 del Decret 27/2023, de 10 de març, del Consell, pel qual es regulen la tipologia i el funcionament dels centres, servicis i programes de servicis socials, i l'ordenació d'estos dins de l'estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials) que es troben en situació d'emergència o vulnerabilitat social i sempre que complisquen els requisits regulats en la present ordenança.

Es garantirà el dret a l'atenció primària de Servicis Socials en condicions d'igualtat, accessibilitat universal i equitat a totes les persones amb residència efectiva a Alfafar.

Seràn titulars del dret subjectiu reconegut a través de les PEUS totes les persones, en condicions d'igualtat, dignitat i privacitat, sense cap discriminació per circumstància personal o social i amb residència efectiva a Alfafar.

S'entén per residència efectiva a Alfafar l'acció de residir o habitar en el municipi, amb caràcter habitual i amb voluntat de permanència en aquell, manifestada per mitjà d'actes executats de manera expressa enfront d'autoritats o altres actors socials que acrediten un arrelament estable i real en la localitat.

En qualsevol cas, podrà acreditar-se esta circumstància, mitjançant la següent documentació:

- a) Informe d'Atenció Primària de Servicis Socials municipals que acredite la residència efectiva.
- b) Certificat d'empadronament municipal



- c) Tindre descendents menors de 18 anys escolaritzats en el municipi, acreditant este fet mitjançant certificat del centre escolar.

Article 7. Unitat de convivència

1. Tindran la consideració d'unitat de convivència les següents persones o grups de persones:

a) Es considerarà unitat familiar o de convivència les persones que viuen soles en una vivenda o allotjament. En els casos que, vivint soles, estigueren unides a altres per matrimoni o una altra forma de relació permanent anàloga a la conjugal hauran de reclamar, durant tot el període de duració de la prestació, qualsevol dret econòmic que li puga correspondre a qualsevol membre de la unitat de convivència i exercitar les accions corresponents per a fer-les efectives. S'exceptuaran en els següents casos:

- que es troben iniciats els tràmits judicials de nul·litat, separació o divorci, o el de baixa en el Registre d'Unions de fet si és el cas.

- que es tracte de dones víctimes de violència de gènere, de violència sexual, de tràfic, així com altres violències sobre la dona arreglades en l'article 3 de la Llei 7/2012.

- que es tracte de persones que tinguen la condició de refugiades o hagen realitzat la sol·licitud per al reconeixement de tal condició i esta sol·licitud siga admesa a tràmit i el seu cònjuge o persona amb el qual mantinga una forma de relació permanent anàloga a la conjugal no residisca en el territori espanyol.

- que es tracte de persones migrants i el seu cònjuge o persona amb el qual mantinga una forma de relació permanent anàloga a la conjugal no residisca en el territori espanyol, en tal suposat, la condició d'unitat de convivència podrà mantindre's per un període màxim de dotze mesos.

b) Es considerarà unitat familiar o de convivència, a l'efecte de les ajudes previstes en la present ordenança, la integrada per la persona sol·licitant i les que convisquen en el mateix domicili, i es troben unides per vincles matrimonials o relació permanent anàloga a la conjugal o per vincles de parentiu fins al segon grau de consanguinitat, afinitat o adopció o altres persones que les que conviuen en virtut de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment.

Sense perjudi de l'anterior, es considerarà que també formen part de la unitat familiar o de convivència les altres persones que, convivint en el mateix domicili que la persona sol·licitant, van poder beneficiar-se de les ajudes que es concedisquen.

A l'efecte del que estableix este article, es considera parella de fet la constituïda amb una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal amb almenys dos anys d'antelació, per qui, no estant impedit per a contraure matrimoni, no tinguen vincle matrimonial amb una altra persona i hagen conviscut de manera estable i notòria amb caràcter immediat a la sol·licitud de la prestació i amb una duració ininterrompuda no inferior a cinc anys.

La defunció d'alguna de les persones que constitueixen la unitat de convivència no alterarà la consideració de tal, encara que esta defunció supose la pèrdua dels vincles previstos en l'apartat anterior



c) Sense perjudi del que s'estableix en l'apartat anterior, podran ser destinatàries de PEUS aquelles unitats de convivència formades per dos o més persones de 18 anys o menors d'esta edat emancipats que, sense mantindre entre si una relació de les consignades en el subapartat a) i b), d'este article, habiten en un mateix domicili. En els casos en els quals unisca o diverses persones compartisquen vivenda amb una unitat de convivència, s'entendrà que no formen part d'esta a l'efecte de la PEUS, considerant-se l'existència de dos unitats de convivència, una formada per les persones que manquen de vincle entre si i una altra la constituïda pels membres d'una família, o, si és el cas, d'una unitat de convivència constituïda pels membres de la família o relació anàloga i una persona beneficiària individual. Estes persones beneficiàries hauran d'haver viscut de manera independent durant almenys un any abans de la sol·licitud de la PEUS.

d) Així mateix, s'entendrà que una persona ha viscut de manera independent si ha romàs en situació d'alta en qualsevol dels règims que integren el sistema de la Seguretat Social durant almenys dotze mesos, continuats o no, i sempre que acredite que el seu domicili ha sigut diferent dels seus progenitors, tutors o acollidors durant tres anys immediatament anteriors a la sol·licitud. Este requisit no s'exigirà a les persones que per a ser víctimes de violència de gènere hagen abandonat el seu domicili habitual, les que hagen iniciat els tràmits de separació o divorci o a les quals es troben en altres circumstàncies que puguen determinar-se per criteri professional.

2. Les persones que hagen establert de forma sobrevinguda el seu domicili en la mateixa vivenda o allotjament amb una altra unitat de convivència amb les quals mantinguen algun dels vincles previstos en el subapartat b) de l'apartat 1 d'este article i sempre que acrediten este extrem mitjançant l'informe social que es realitzarà atenent la gravetat de la situació, podran tindre la consideració d'unitat de convivència independent, en els següents casos:

a) Persones prostituïdes, víctimes d'explotació sexual o tracta i les víctimes de violència de gènere o intrafamiliar, que hagen abandonat el seu domicili habitual soles o acompanyades de les seues filles, fills o persones menors d'edat en règim de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment familiar permanent o altres familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.

b) Persones que deixen el seu domicili habitual juntament amb els seus descendents, si és el cas, a conseqüència d'un procés judicial matrimonial per nul·litat, separació o divorci, o a conseqüència de l'absència de recursos econòmics suficients per a sufragar els despeses d'allotjament, o per alguna altra situació extrema que així ho determine. S'entendrà que podran tindre la consideració de situació extrema els supòsits de pèrdua sobtada de vivenda derivats d'un sinistre, catàstrofe o causa de força major.

c) Persones o unitats de convivència que hagen patit un procés de desnonament de la seua vivenda habitual i no siguen titulars de drets de propietat o d'ús altres immobles que puguen ser destinats a vivenda

d) Persones entre 16 i 24 anys d'edat, els dos inclosos, amb persones menors d'edat al seu càrrec.

e) Persones majors d'edat i menors de 25 anys que hagen estat subjectes en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat a una mesura



administrativa de protecció de menors, o en un centre socioeducatiu per al compliment de mesures judicials.

f) Persones entre 16 i 18 anys que participen en programes per a la preparació de la vida independent com a complement a una mesura de protecció jurídica de la persona menor d'edat, d'acord amb l'article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

g) Transcorregut el període de 12 mesos s'extingirà la unitat de convivència diferenciada i s'integraran tots els convivents en una única unitat de convivència.

3. En cap cas, es podrà formar part de dos unitats de convivència amb caràcter simultani, excepte, d'una banda, les persones menors d'edat en règim legal de custòdia compartida establida en sentència judicial o conveni regulador homologat judicialment per nul·litat, separació o divorci de les persones titulars de les prestacions. I, en el mateix sentit ho seran les persones majors que resideixen rotativament a casa dels fills/as.

4. La convivència efectiva o la no convivència referida en este article hauran de ser objecte de comprovació per part d'Atenció Primària de Servicis Socials quan existisquen indicis que permeten dubtar de la veracitat de la situació declarada.

5. Es considerarà que no extingeix la convivència la separació transitòria per raó d'estudis, treball, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars.

Article 8. Vivenda o allotjament

1. S'entendrà per vivenda o allotjament tot marc físic utilitzat de manera habitual com a residència permanent per una o més persones que componen la unitat de convivència i visquen de manera independent, encara que les persones que ho habiten no posseïsquen cap títol jurídic.

2. S'entenen compreses com a modalitats de vivenda o allotjament:

- a) Vivendes o allotjaments particulars ocupats per una única unitat de convivència.
- b) Vivendes o allotjaments particulars en règim de lloguer en les quals convisquen unitats de convivència independents i hagen arrendat una o diverses habitacions de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans.
- c) Vivendes o allotjaments particulars en els quals diverses unitats de convivència compartisquen col·lectivament un mateix lloguer, apareixent totes elles com coarrendatàries.

En tots els supòsits previstos en este article s'entén que existeix una única vivenda o allotjament, independentment del nombre d'unitats de convivència que compartisquen eixe marc físic i de l'existència o no de parentiu entre estos.

3. Tindran la consideració de centre d'acolliment temporal els albergs i pisos d'acolliment per a persones sense llar o per a persones en situació d'exclusió, persones refugiades o asilades o altres col·lectius en situació de falta d'allotjament.



Article 9. Requisits generals de les persones beneficiàries

1. Mancar de patrimoni suficient i no disposar de recursos o ingressos econòmics per a afrontar els despeses derivats de la situació d'emergència.
 2. Disposar de la proposta tècnica en el qual es determine la necessitat de l'acció objecte de l'ajuda i es faça constar que s'han esgotat tots els recursos existents encaminats a resoldre la necessitat.
 3. Residir de manera efectiva en el municipi d'Alfafar
 4. Acreditar la situació de necessitat.
 5. Aportar la documentació requerida en cada cas.
 6. Acceptar expressament, per part de la persona usuària, les condicions de la intervenció social si és procedent.
 7. Haver sol·licitat aquelles prestacions a les quals poguera tindre dret (prestacions del Servei Estatal d'Ocupació i /o de la Seguretat Social, pensió alimentària a favor de persones menors d'edat, beques de menjador i guarderia), i qualsevol altra prestació, recurs o servicis que puga afavorir la cobertura de la situació d'emergència existent.
 8. Si és el cas, haver justificat el pagament de l'ajuda concedida anteriorment.
 9. Que en la unitat familiar de convivència no existisca absentisme escolar en cap dels membres que es troben en edat d'escolarització obligatòria.
 10. No disposar d'una altra ajuda o prestació per al mateix fi atorgat per organisme públic o privat distint. No obstant això, si l'import de la prestació o els ingressos que percep no superen els límits de l'ingrés establits en la present ordenança podran sol·licitar la PEUS que en la mateixa es regula, per a complementar esta ajuda
 11. Que l'ajuda sol·licitada no siga competència altres organismes públics
 12. Que la seua renda o, en cas de formar part d'una unitat de convivència la renda conjunta anual de la unitat de convivència a la qual es pertany, siga igual o inferior a 1'5 vegades (IPREM) de 14 pagues. Quan la unitat de convivència estiga formada per més d'una persona, el multiplicador de renda respecte a l'índex IPREM de 14 pagues s'incrementarà en 0'3 per cada membre addicional, establint-se el límit màxim de 3 vegades IPREM de 14 pagues.
- Esta quantia podrà ser superada si per prescripció tècnica o causes sobrevingudes considerades.
- a) A l'efecte de comprovar la insuficiència de recursos, es tindrà en compte, a més de les rendes o altres béns patrimonials o circumstàncies que declare la persona sol·licitant, els signes externs que manifesten la seua real capacitat econòmica, denegant-se el dret a la petició, sempre que desmentisquen la declaració emesa per la persona sol·licitant.
 - b) Per a valorar l'existència de patrimoni suficient es tindrà en compte la titularitat dels béns immobles sempre que no constituísca la vivenda



habitual de la persona sol·licitant, així com els rendiments del capital mobiliari.

- c) No disposar de liquiditat en els comptes bancaris de la unitat de convivència de més de 1'5 de l'IPREM
- d) No disposar de béns mobles, exceptuant el vehicle d'ús personal, diferents dels comptes bancaris de tota la unitat de convivència de més de 2 vegades l'IPREM o de béns immobles (sense comptar la vivenda habitual), sobre els quals tinguen dret de propietat, usdefruit o qualsevol altre que, per les seues característiques, valoració, possibilitat d'explotació o venda, de tal sort que siga evident la inexistència de mitjans suficients per a atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l'ajuda.

13. En el cas de persones desocupades, estar inscrites com a demandants d'ocupació en les oficines LABORA i estar al corrent en les revisions de la demanda d'ocupació i dur a terme una busca activa d'este, sempre que siga possible donades les situacions de vulnerabilitat.

14. No haver sufragat el gasto objecte de l'ajuda sol·licitada amb anterioritat a la petició de la mateix (excepte en els casos contemplats en l'article 5.6)

15. Disposar de la prescripció tècnica en la qual es determine la necessitat de l'acció objecte de l'ajuda i es faça constar que s'ha esgotat tots els recursos existents encaminats a resoldre la necessitat pels servicis tècnics municipals

16. No es podrà sol·licitar ajuda pel mateix concepte si en els dos mesos anteriors es va sol·licitar la mateixa, a excepció de l'ajuda per alimentació i prevenció. Anterior a la presentació de la sol·licitud, durant un període no inferior a 6 mesos, excepte situacions excepcionals degudament acreditades en el corresponent informe social.

Les persones beneficiàries, d'acord amb l'article 13.2, lletra e), de la Llei General de Subvencions, donada la naturalesa de la subvenció, quedaran exonerats del requisit de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Article 10. Òrgans competents

A l'efecte de la present Ordenança seran òrgans competents per a la Instrucció, resolució i pagament de les mateixes els següents òrgans:

- 1. La instrucció dels expedients relatius a les ajudes objecte de la present ordenança es realitzarà pel departament d'atenció primària de servicis socials.
- 2. La resolució del procediment de concessió/denegació de les ajudes correspon a l'Alcaldia.
- 3. L'Alcaldia és l'òrgan competent per a l'aprovació del pagament i de la justificació de la subvenció.



Article 11. Procediment d'adjudicació

El procediment ordinari de concessió de subvencions serà el de concurrència competitiva, previst en l'article 22.1 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.

Article 12. Publicitat de la convocatòria

La convocatòria anual es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en la Base de dades Nacional de Subvencions, en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la seua pàgina Web www.alfafar.com així com en el portal de transparència de l'Ajuntament.

La convocatòria es considerarà oberta mentre existisca consignació pressupostària.

Article 13. Habilitació del crèdit econòmic

S'habilitarà la corresponent consignació municipal en les següents partides:

La concessió d'ajudes quedarà supeditada al límit d'existència de consignació pressupostària, procedint-se a la modificació de crèdit quan fora necessari, conforme al que es preveu en l'article 32 de la Llei 3/2019 d'Atenció Primària de Servicis Socials Inclusius.

Article 14. Despeses subvencionables

Podran ser elegibles els despeses que complisquen els requisits i objectius d'esta ordenança, tenint en compte les exclusions previstes en la Llei 38/2003 General de Subvencions, el Reial decret 887/2006 que aprova el reglament de subvencions i les resolucions i criteris interpretatius de la IGAE.

TÍTOL II: PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES PEUS.

1. ASPECTES GENERALS

Article 15. Objecte

Constitueix l'objecte d'esta normativa la regulació del procediment per a la concessió de Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEUS) a l'Ajuntament d'Alfafar. Estes ajudes estan dirigides a persones individuals, nuclis familiars o unitats de convivència que no puguem resoldre amb mitjans propis una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica, sent sempre un suport a la intervenció social.

Per a la diferenciació de tipologies PEUS és necessari tindre en compte les següents definicions:

a) **Emergència social:** L'emergència social és una situació sobrevinguda i imprevista en el qual objectivament la persona o grup de persones es troben de manera sobtada sense mitjans personals, familiars o socials per a donar resposta a les seues necessitats bàsiques.



b) Urgència social: Es tracta d'una situació imprevista resultat de processos continus en el temps, o no, i que, de no tindre una resposta, pot generar o incrementar una situació de vulnerabilitat, desprotecció i exclusió social en les persones i grups que la patixen, afectant la cobertura de les seues necessitats.

c) Despeses subvencionables: Les ajudes podran atorgar-se a persones concretes, amb caràcter periòdic o per una sola vegada en l'exercici econòmic, per servicis esporàdics o adquisicions puntuals de productes de primera necessitat.

Article 16. Tipologia i característiques de les prestacions econòmiques individuals.

Les ajudes podran ser de cinc tipus:

- a) PEUS D'URGÈNCIA SOCIAL
- b) PEUS D'EMERGÈNCIA SOCIAL
- c) PEUS PER AL SUBMINISTRAMENT BÀSIC ENERGÈTIC
- d) PEUS PER A LA MILLORA DE L'AUTONOMIA DE PERSONES MAJORS I PERSONES AMB DISCAPACITAT
- e) PEUS DE PREVENCIÓ DE L'EXCLUSIÓ SOCIAL

- a) PEUS D'EMERGÈNCIA SOCIAL:

Es consideraran situacions d'emergència social les següents:

➤ Necessitats bàsiques:

- Renda bàsica municipal: Entenent-se per tal la prestació econòmica destinada a cobrir necessitats bàsiques, dirigides a unitats familiars que hagen esgotat totes les prestacions que puguem correspondre a qualsevol membre de la unitat de convivència per part altres Administracions públiques o entitats privades, o havent-les sol·licitat, estes estiguen pendent de resolució, sempre que no tinguen caràcter retroactiu la concessió d'esta.
- Alimentació bàsica, productes de caràcter infantil de primera necessitat, productes d'alimentació específica per al·lèrgies o intoleràncies alimentàries.
- Productes d'higiene personal, peces i calçat bàsic, i productes de neteja domèstica.

➤ Despeses imprescindibles per a l'ús de la vivenda habitual: Ajuda per a lloguer de vivenda habitual. Amortització préstec bancari. Entrades vivenda (fiança, arrendaments...). Imports pendents en evitació de desnonament. Xicotets arranjaments de vivenda habitual quan estos es consideren imprescindibles per a la permanència en el domicili. Adquisició de mobiliari i xicotets electrodomèstics quan estos es consideren imprescindibles per a les necessitats bàsiques i en situacions excepcionals. Neteges, desinfeccions i desinfecció en situacions excepcionals. Allotjament alternatiu. Despeses derivats de la comunitat.



➤ Despeses de mobilitat: per desplaçaments o de transport deguts a assistència a tractaments mèdics, de formació o busca laboral, per a tramitació de documentació legal bàsica o per situacions excepcionals

➤ Així mateix es cobriran despeses excepcionals donada la situació de pobresa o fragilitat cobrint aquells despeses de pròtesis oculars, odontològiques, podològiques, farmacèutiques, ortoprotètics de vital necessitat per a la persona sol·licitant que no estiguen coberts pel sistema públic sanitari.

b) PEUS D'URGÈNCIA SOCIAL

Totes aquelles prestacions econòmiques de caràcter puntual i no repetitives que puguen cobrir la prevenció de patir una situació d'exclusió social donat una situació sobtada o de manera precipitada. Poden ser contingències vitals estressants, inesperades i generalment d'aparició súbbita, o situacions produïdes per un fet no previst, per culpa de causes naturals o provocades, que afecten i comprometen les capacitats personals.

c) PEUS PER AL SUBMINISTRAMENT BÀSIC ENERGÈTIC

Ajudes econòmiques complementàries, familiars i no periòdiques que permeten pal·liar, minimitzar i fins i tot atallar el problema de subministrament de gas, aigua i electricitat, la fi del qual és garantir un període mínim de cobertura en aquelles llars que puguen patir les conseqüències de la pobresa energètica.

d) PEUS PER A LA MILLORA DE L'AUTONOMIA DE PERSONES MAJORS

Comprén totes aquelles mesures que possibiliten a les persones amb problemes motrius o sensorials el seu manteniment en el mateix entorn, incrementant la seua autonomia, potenciant les possibilitats, afavorint les relacions i la integració en la societat, com ara:

- Ajudes tècniques considerant-se com tals l'adaptació funcional de la llar i l'adquisició d'útils i estris necessaris per al desenrotllament en la vida ordinària, entre altres poden considerar-se instruments de comunicació, ajudes per a autonomia per a la vida diària, no considerant aquelles que, fins i tot sent una millora de la llar, estiguen directament relacionades amb impediments físics o sensorials com són els electrodomèstics, ni obres o reformes.

- Requisits per a complir íntegrament de les persones beneficiàries d'ajudes de desenrotllament personal:

1. Ser major de 60 anys
2. Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en la persona sol·licitant que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.
3. Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació, sent exclosos els que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.



4. Idoneïtat del sol·licitat per a cobrir la necessitat que planteja la persona sol·licitant.
5. No tindre accés a ajudes d'altres Administracions públiques o recursos propis que cobrisquen esta necessitat i que, juntament amb l'ajuda sol·licitada, superen el concepte per al qual es demana la citada ajuda.

e) **PEUS DE PREVENCIÓ A L'EXCLUSIÓ SOCIAL**

Despeses que per circumstàncies de greu necessitat social són prescrites facultativament per professionals de l'equip d'atenció primària de servicis socials i poden atendre en les seues prestacions professionals una intervenció social prevenint l'exclusió i afavorint la igualtat, dignitat i respecte, afavorint la inclusió en el context social i cultural, afavorint la plena autonomia, potenciant les relacions i connexions socials, proporcionant capacitats i recursos i abordant la desigualtat des de la justícia social.

Estes ajudes estaran prescrites prioritizant a les xiquetes, xiquets i adolescents, així com a persones amb discapacitat mental greu, o discapacitat severa ateses en els seus domicilis, incloent en les seues famílies, ateses les persones diagnosticades de vulnerabilitat o risc d'exclusió impeding el desbordament o claudicació familiar en les cures o l'abocament a l'abandó o desemparament familiar.

Article 17. Quanties

a) **PEUS D'EMERGÈNCIA SOCIAL:**

NECESSITATS BÀSIQUES

La quantia de la prestació dependrà del nombre de membres de la unitat de convivència

- a) 1 persona adulta: 75% de l'IPREM mensual
- b) 2 persones adultes: 85% de l'IPREM mensual
- c) Més de 3 persones adultes: 95% de l'IPREM mensual
- d) l'IPREM es veurà incrementat un 10% per cada una de les persones adultes que componen la unitat familiar

En qualsevol cas, no es concedirà prestacions econòmiques superiors a 1'5 de l'IPREM, excepte per prescripció facultativa degudament fonamentada. Els llindars màxims a concedir seran en qualsevol cas els regulats per la Conselleria que tinga competència en matèria de servicis socials.

A la quantia mensual establida se sumarà un complement de monomarentalitat o monoparentalitat equivalent al 10% més, en el supòsit de la unitat de convivència. A l'efecte de determinar la quantia de la prestació, s'entendrà per unitat de convivència monomarental o monoparental la constituïda per només una adulta o adult amb una filla o fill o més persones menors d'edat que es convisca, o bé estiguen en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats adoptius a càrrec seu, quant constitueix la persona sustentadora única de la unitat de convivència, justificant documentalment amb el títol de família monoparental



femenina o monoparental emés per la Conselleria que tinga competència en matèria de servicis socials.

b) PEUS D'URGÈNCIA SOCIAL

1. Pròtesis oculars: Mòdul màxim 90% IPREM mensual.
2. Necessitat odontològica no cobertes per fundacions o la sanitat pública: Mòdul màxim 90% d'IPREM mensual
3. Necessitats podològiques: Mòdul màxim 60% IPREM mensual.
4. Despeses farmacèutics: Mòdul màxim 20% IPREM mensual del tractament no cobert per la sanitat pública
5. Taxes per a la tramitació de documentació: Mòdul màxim 65% d'IPREM mensual.
6. Productes ortoprotèsics no coberts per la Seguretat Social: Mòdul màxim 100% IPREM anual en 12 pagues.
7. Adquisició de mobiliari bàsic i electrodomèstics de primera necessitat per a la vivenda habitual: fins al 50% d'IPREM anual en 12 pagues
8. La vivenda habitual: al 50% d'IPREM anual 12 pagues.
9. Despeses de comunitat de veïnatge: fins al 10% d'IPREM anual 12 pagues.
10. Allotjament alternatiu: fins al 14% d'IPREM mensual 12 pagues
11. Varis: Mòdul màxim 70% d'IPREM mensual, quan es presenten situacions sobrevingudes.

c) PEUS PER AL SUBMINISTRAMENT BÀSIC ENERGÈTIC

Màxim s'abonarà el 80% del deute corrent de subministrament bàsic de llum, aigua i gas.

d) PEUS PER A LA MILLORA DE L'AUTONOMIA DE PERSONES MAJORS

1. Audiòfons, fins al 30% d'IPREM anual 12 pagues
2. Ulleres fins al 30% d'IPREM anual 12 pagues
3. Estris per a l'autonomia de la vida diària fins al 30% d'IPREM anual 12 pagues

e) PEUS DE PREVENCIÓ A L'EXCLUSIÓ SOCIAL, amb prescripció facultativa

1. Necessitats d'integració social: Mòdul màxim 100% d'IPREM mensual.
2. Activitats culturals i d'oci en la infantesa o adolescència: fins al 100% del pressupost presentat



TÍTOL III PROCEDIMENT

Article 18. Inici del procediment.

La sol·licitud, a instàncies de part, haurà de presentar-se en el model normalitzat, que és d'ús obligatori, degudament formalitzat i firmat per la persona sol·licitant. També pot ser iniciada d'ofici mitjançant informe emés per les persones professionals tècniques municipals de servicis socials, que posaran en marxa l'expedient amb caràcter general.

Esta sol·licitud conté una petició d'autorització i tractament de dades personals que haurà d'autoritzar la persona sol·licitant, igual que tots els membres de la seua unitat de convivència d'edat major a 14 anys.

Esta sol·licitud es registrarà bé de manera personal en el registre de l'oficina d'atenció ciutadana SAC o mitjançant presentació telemàtica en la seu electrònica de l'ajuntament.

Article 19. Termini de presentació.

El termini de presentació serà durant tot l'any, donat l'objecte de les prestacions econòmiques d'emergència i urgència social.

Article 20. Esmena de sol·licituds.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o no s'acompanye la documentació exigida, es requerirà a la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye als documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, es considerarà desistida la seua petició, i es procedirà a l'arxivament de l'expedient, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els terminis previstos en l'art. 21 de la Llei 39/2015, abans citada.

Article 21. Instrucció general del procediment.

1. La instrucció de l'expedient correspondrà a l'Equip Tècnic d'Atenció Primària, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 24 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.

Les sol·licituds d'ajudes seran remeses al Servei d'Atenció Primària de l'Ajuntament d'Alfatar.

Posteriorment, la persona tècnica que instruisca l'expedient podrà efectuar les comprovacions oportunes sobre la veracitat de les dades aportades per la ciutadania.

2. Una vegada verificades les sol·licituds en la forma prevista, s'emetrà la corresponent proposta de prescripció tècnica, havent d'incloure una proposta favorable o desfavorable, degudament motivada segons Informe-barem establert.



3. Per a la concessió de les ajudes s'estarà al que es disposa en cada una de les seues modalitats.

4. La proposta de prescripció favorable, en tot cas, farà referència als següents aspectes:

- Persona beneficiària.
- Problemàtica plantejada (necessitat tècnica de l'ajuda).
- Modalitat que es considera adequada, especificant conceptes i quantitats.

5. Es consideraran causes de denegació de la proposta de concessió de les ajudes les següents:

- No complir els requisits per a accedir a estes.
- Incompliment de les obligacions respecte a les xiquetes, xiquets o adolescents: escolarització i assistència en el centre escolar, vacunació, seguiment mèdic...
- Ser baixa voluntària en un treball o rebutjar ofertes d'ocupació sense causa justificada.
- Rebutjar ofertes de formació sense causa justificada.
- No estar inscrit com a demandant d'ocupació, qualsevol membre de la unitat de convivència major de 16 anys sense causa justificada.
- No complir amb les obligacions del programa d'intervenció social plantejat per les persones professionals tècniques.
- Rebre ajudes d'altres entitats en el mateix objecte de la sol·licitud.
- No haver justificat una altra prestació econòmica concedida anteriorment una vegada finalitzat el termini previst a este efecte, o haver-la justificat indegudament.
- Falsejament o obstaculització de les dades necessàries per a obtindre l'ajuda.
- Desistiment de la persona sol·licitant.
- Per ser incompatibles de conformitat amb la present ordenança.
- Qualsevol altre supòsit que impedisca o desnaturalitze l'objecte de l'ajuda sol·licitada abans d'executar el seu abonament.

6. Les propostes tècniques de prescripció, favorables o desfavorables, seran presentades i validades en la Comissió Tècnica de Valoració i seguiment de les Prestacions Econòmiques, regulada en l'article 39 del Decret 38/2020, modificat pel Decret 188/2021, que es constitueix com a òrgan col·legiat d'àmbit zonal, amb la finalitat de valorar i proposar respostes individualitzades a les sol·licituds presentades en matèria de prestacions econòmiques de competència local.

Article 22. Documentació general a aportar.

La sol·licitud, a instàncies de part, haurà d'anar acompanyada de la documentació necessària per a acreditar el compliment dels requisits regulats en l'ordenança que en este article s'assenyala:



a) Sol·licitud d'ajudes públiques, segons model oficial, subscrit per la persona beneficiària o pel seu representant, degudament emplenada en la seua integritat.

b) Documentació que ha de contindre l'expedient de tots els membres de la Unitat de Convivència:

1. Identificació, mitjançant la següent documentació:

- a) DNI /NIE/targeta de residència o passaport. En el cas dels menors de 14 anys que no tinguen document nacional d'identitat, fotocòpia del llibre de família o certificat literal de naixement.
- b) Quan la persona sol·licitant i els membres de la seua unitat de convivència tinguen condició de refugiades, asilades o desplaçades forçosament hauran de presentar un document d'identitat. En cas d'haver presentat la sol·licitud d'asil o autorització d'estada per raons humanitàries, i quan la mateixa es trobe en tràmit, s'acreditarà mitjançant certificat de l'organisme corresponent.
- c) Quan la persona sol·licitant tinga la condició d'apàtrida, haurà d'aportar la targeta acreditativa del reconeixement d'esta condició.
- d) Quan la persona sol·licitant tinga dret a la protecció subsidiària contemplada en la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del Dret d'Asil i de la Protecció Subsidiària, haurà d'acompanyar la documentació acreditativa d'esta circumstància, amb certificació de l'organisme competent de la seua admissió a tràmit, en cas de no estar resolta.
- e) En el supòsit de trobar-se en situació irregular, haurà de presentar davant els Serveis Socials qualsevol document que acredite la seua identitat expedida per les autoritats competents del país d'origen o de procedència, així com, si és procedent, de la relació conjugal o de filiació o de parentiu.
- f) Quan la persona sol·licitant es trobe en qualsevol altra situació de vulnerabilitat, haurà d'acompanyar la documentació acreditativa d'esta circumstància.

2. Llibre de família

3. SIP

4. Sentència de separació o divorci i conveni regulador, si és procedent

5. Extracte bancari del pagament de pensió compensatòria o d'aliments, si és procedent

6. Vida laboral, mitjançant la següent documentació:

- a) Certificat de la vida laboral obligatòriament
- b) Contracte de treball i les 3 últimes nòmines, autònoms mod 130-131
- c) Certificat del SERVEF de prestacions i targeta DARDE
- d) En cas que el sol·licitant o algun membre de la família estiga treballant per compte propi (autònom), cal aportar l'última declaració



- d'Hisenda o, en cas de no haver-la fet encara per a ser nova activitat, l'última declaració trimestral (model 101)
- e) Rebut bancari de la liquidació de cotitzacions on conste la base de cotització a la Seguretat Social.
7. Justificació d'ingressos econòmics.
- a) Quan no s'aporte cap acreditació d'ingressos, s'emplenarà per la persona interessada una declaració responsable d'ingressos conforme disposat en l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
- b) Declaració de renda actual, o certificat negatiu, o declaració jurada d'ingressos
- c) Certificat de pensions de l'INSS
- d) Còpia dels moviments del compte bancari dels últims tres mesos
- e) Justificant bancari en el cas que el sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència reba pensió de l'estranger.
8. Contracte de lloguer, o rebut d'hipoteca
9. Model de reconeixement de deute pel propietari de la vivenda
10. Pressupost o factures del cost de la necessitat
11. Fitxa de tercers
12. Una altra documentació que l'equip tècnic considere oportú

La presentació de la sol·licitud d'ajuda implica l'autorització a favor de l'Ajuntament d'Alfafar per a comprovar d'ofici el Certificat d'empadronament i convivència. En cas de la no existència d'empadronament però sí de residència efectiva, es considerarà justificada tindre assignada assistència mèdica o estar inscrit com a demandant d'ocupació o tindre descendents escolaritzats o altres supòsits justificables baix criteri professional.

En la sol·licitud, tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys podran realitzar autorització expressa a l'Ajuntament d'Alfafar per a recaptar l'òrgan instructor les dades de caràcter personal i informació patrimonial necessaris per a la tramitació de l'expedient, de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i de Cadastre. Esta autorització també inclou el tractament d'estes dades.

Article 23. Resolució i Notificació

1. Les ajudes econòmiques que es regulen en la present ordenança es resoldran per Resolució d'Alcaldia.
2. El termini de resolució i la seua corresponent notificació serà d'un mes comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud en el corresponent registre d'acord amb el que s'estableix en la Llei 9/2016 de la Generalitat de 28 d'octubre, de regulació dels procediments d'emergència ciutadana. El termini establert quedarà interromput quan el procediment es paralitze per causa imputable a la



persona sol·licitant, d'acord amb el que s'estableix en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

3. La resolució serà motivada, havent de quedar acreditats en el procediment els fonaments de la resolució, i haurà de contindre la relació de persones sol·licitants a les quals es concedeix les prestacions i les seues quanties, constant de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds.

4. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa, legitima a la persona interessada o interessades per a entendre-la estimada per silenci administratiu d'acord amb l'article 3.2 de la Llei 9/2016 de la Generalitat de 28 d'octubre, de regulació dels procediments d'emergència ciutadana.

5. La resolució es notificarà en la forma establida en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Article 24. Finalització del procediment

Els motius de finalització del procediment, d'acord amb el que es preveu en l'article 84 de la Llei 39/2015, seran els següents, previ tràmit d'audiència i resolució adoptada sobre este tema:

- a) Desistiment de la sol·licitud: per incompareixença o per no aportar la documentació assenyalada en l'Ordenança.
- b) Renúncia al dret.
- c) Per impossibilitat material de continuar amb el procediment per causes sobrevingudes: per defunció de la persona sol·licitant, desaparició de les circumstàncies o situació de necessitat que va motivar la concessió de l'ajuda o per trasllat de domicili en un altre municipi.

Article 25.- Recursos.

Les resolucions, expresses o presumptes, dictades per l'òrgan competent de l'Ajuntament d'Alfatar posen fi a la via administrativa, i contra elles es podrà interposar potestativament recurs de reposició, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, davant el mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat del Contenciós- Administratiu de València en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua notificació, o de sis mesos si l'acte fora presumpte, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa- Administrativa, sense perjudi que puga interposar-se qualsevol altre que s'estime pertinent.

Article 26. Protecció de dades

Quant a l'ús i protecció de les dades contingudes en esta documentació, haurà d'estar-se al qual es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.



TÍTOL IV. DEL PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES.

Article 27. Abonament de l'ajuda

La gestió pressupostària de les ajudes arreplegades en la present ordenança s'efectuarà per l'òrgan de gestió pressupostària, que emetrà la corresponent proposta d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació amb càrrec a la partida destinada a este efecte i amb el límit dels crèdits consignats en esta; i es faran efectives a través del sistema transferència bancària, en la modalitat de pagament directe o diferit, de conformitat amb el que s'establix en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; l'RD 500/1990; i les bases d'execució del Pressupost Municipal d'este Ajuntament.

L'Alcaldia és l'òrgan competent per a l'aprovació del pagament i de la justificació de la subvenció.

Article 28. Règim de pagaments

El pagament de les ajudes s'efectuarà a la persona sol·licitant. No obstant això, l'anterior, a proposta de les persones professionals tècniques que tramiten l'ajuda i deixant constància en la seua prescripció, el pagament de l'ajuda es podrà efectuar a persona diferent de la sol·licitant en els següents suposats:

- a) Document notarial o judicial que acredite la provisió de mesures de reforç, en què en el cas el pagament s'efectuarà a la persona designada.
- b) Impossibilitat per part de la persona sol·licitant d'obrir compte bancari per a fer transferència bancària, tindre embargada el compte o amb deutes pendents que impossibilitaren l'efectiu cobrament de l'ajuda. En tals casos, el pagament de l'ajuda haurà d'efectuar-se a la persona que autoritza la persona usuària o, en defecte d'això, a la persona a la qual legalment li corresponga la representació.
- c) En cas que siga necessari i la PEUS estiga orientada al pagament d'un deute es podrà facilitar el pagament directe a l'entitat prestadora del servici.

Article 29. Justificació del gasto

1. La justificació s'acreditarà mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i es presentarà en el Departament de Servicis Socials, per quantia igual o superior a l'import concedit en la resolució. La justificació s'haurà d'efectuar una vegada haver efectuat ús de l'ajuda i en tot cas en el termini màxim de 2 mesos següents a la data de concessió. En el cas de subministraments energètics es disposarà de 10 dies per a la justificació.

2. La falta de justificació o justificació insuficient, a més de l'anul·lació de la subvenció, podrà portar aparellada la pèrdua de la condició de persona



beneficiària per a futures subvencions, sense perjudici del reintegrament de fons, si és el cas.

3. El pagament de la subvenció podrà ser fraccionat, prèvia justificació. El pagament podrà realitzar-se anticipadament a la justificació de la subvenció, tant en la modalitat de pagament únic com pagament fraccionat, sense necessitat d'aportar garanties donada la naturalesa de les ajudes.

4. S'intentarà, en la mesura que siga possible, realitzar el pagament a la persona creditora del servei en funció de les característiques de l'emergència. Si això no és possible o dificulta la tasca administrativa es realitzarà el pagament a la persona peticionària que disposarà d'un termini màxim d'1 mes per a justificar l'import de l'ajuda.

5. Per a la modalitat de Renda Bàsica Municipal, serà aplicable el preceptuat en el punt 7 de l'article 30 de la LGS, per la qual cosa la justificació consistirà en l'acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret, de la situació de precarietat que justificaria l'aplicació d'esta prestació

6. A l'efecte de control de la concurrència de l'ajuda municipal amb subvencions atorgades per altres organismes per a les mateixes situacions, activitats o circumstàncies, els documents originals acreditatius del gasto s'hauran d'invalidar mitjançant sistema d'estampillat que faça constar que este gasto ha sigut aplicat a la subvenció corresponent, indicant en el mateix l'import concedit, quan este no coincidisca amb el total del justificant. Així mateix, si els despeses foren suportats per diferents cofinancadores, haurà de fer-se constar el percentatge d'imputació corresponent a l'ajuda municipal.

TÍTOL V. DEL RÈGIM D'INFRACCIONS

Article 30. Infraccions i Sancions

1. A estes ajudes els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i ho article 43 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Alfàfar i els seus Organismes Públics.

2. Si l'òrgan que atorga, a conseqüència de la seua actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció, hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el citat article 43 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Alfàfar i els seus Organismes Públics.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les sol·licituds de PEIS que es troben en tràmit o en fase de recurs administratiu en la data d'entrada en vigor de la present ordenança, els resultarà d'aplicació el que es disposa en esta, en aquells supòsits que impliquen una millora de la prestació i que complisquen els requisits establits.



DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada l'Ordenança de prestacions econòmiques individualitzades de l'Ajuntament d'Alfatar, aprovada pel Ple de l'Ajuntament d'Alfatar, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de juny de 2020,

DISPOSICIÓ FINAL

D'acord amb el que estableix la llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim local en l'article 70.2 les normes locals no entraran en vigor fins que s'haja publicat completament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i haja transcorregut el termini de 15 dies previst en l'article 65.2.

